

CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD



Proyecto a cargo de FUTUEX
(Fundación Tutelar de Extremadura),
Fundación Aequitas y Fundación
Academia Europea de Yuste, en el
marco del Congreso Permanente
sobre Discapacidad y Derechos
Humanos bajo la autoría de:
Rafael de Lorenzo García
Blanca Entrena Palomero
Almudena Castro-Girona Martínez
Miguel Ángel Cabra de Luna
José Javier Soto Ruiz (Dirección)

Francisco J. Bariffi Artigue
Agustina Palacios Rizzo (Recopilación
y coordinación)

Prólogo: Manuel López Risco







CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD







CAPACIDAD JURÍDICA Y DISCAPACIDAD

**(Un estudio de Derecho Privado Comparado a la luz de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad)**

CUADERNO DE TRABAJO N° 3 / PORTUGAL



Proyecto a cargo de FUTUEX (Fundación Tutelar de Extremadura), Fundación Aequitas y Fundación Academia Europea de Yuste, en el marco del Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos bajo la autoría de:

Rafael de Lorenzo García
Blanca Entrena Palomero
Almudena Castro-Girona Martínez
Miguel Ángel Cabra de Luna
José Javier Soto Ruiz (Dirección)

Francisco J. Bariffi Artigue
Agustina Palacios Rizzo (Recopilación y coordinación)

Prólogo: Manuel López Risco

Diseño de colección: Inmedia
Impresión y encuadernación: Aprosuba-3
Depósito legal:

PRÓLOGO

Manuel López Risco
Presidente Aprosuba 3

Al asumir el compromiso con Futuex de prologar este libro, desde una experiencia vivida como profesional dedicado a la psicología y educación en el campo de la discapacidad, lo hice también desde el papel de padre de una joven con discapacidad y por tanto partícipe en distintos movimientos asociativos del entorno de la discapacidad, desde hace 30 años.

Me van a permitir, pues, desde esta perspectiva, que en primer lugar me extienda para dar unas brevísimas pinceladas, casi telegráficas, a la reciente historia de la discapacidad desde un enfoque sociocultural y educativo, con algunas ejemplificaciones en torno a la discapacidad intelectual, con la convicción de que sólo sabiendo de donde venimos podremos saber a donde vamos.*

*Los autores citados están referenciados bibliográficamente en la obra: López Risco, M. (2001) Intervención cognitiva en estrategias de memoria en personas con retraso mental. Ed. Centro Extremeño de Documentación e Investigación sobre Discapacidad Intelectual de Feaps Extremadura. Impreso en Aprosuba 3 de Badajoz.

Claude Berger, al prolongar el libro *Minusvalía e Inadaptación*, pone en boca de su autor, Jean-Marc Bardeau, la siguiente afirmación: «La minusvalía no es natural. La minusvalía es institucional» y que un comprometido experto como Alfredo Fiero (1981) aclara, refiriéndose a la personas con discapacidad intelectual, con el lenguaje de la época; «El subnormal no ha existido siempre. Es una figura de la sociedad occidental relativamente reciente, resultante de una combinación aciaga de factores somáticos, psíquicos y sociales que coinciden aproximadamente con su institucionalización».

Noticias y referencias a personas deficientes, minusválidas o enfermas mentales, se encuentran desde la antigüedad en casi todas las culturas y civilizaciones con muy distintas y antagónicas consideraciones y se pueden consultar en autores clásicos como Foucault (1967); Salvat (1970); Bardeau (1978); Ingalls (1982).

Entre los estudiosos del tema, existe coincidencia en señalar la segunda mitad del siglo XVII como el comienzo del internamiento indiscriminado en Europa de deficientes, dementes, maleantes, sospechosos políticos, etc.. Tanto es así que 1656, se crea el Hospital General de París para coordinar varios centros ya existentes y se decreta su funcionamiento, pudiéndose recluir en ellos a pobres, enfermos, sanos, inválidos, etc., que pueden ir a parar al centro, bien por propia voluntad,

o bien por decisión de una autoridad real o judicial. Los locos y «asimilados» serán sometidos durante siglo y medio a este régimen de reclusión en estos centros que asumen una cierta ética de moralidad caritativa, de supervivencia y de asistencia pública.

Más adelante, la Revolución Francesa trae aires de libertad y, bajo los principios de igualdad y justicia, se liberan personas injustamente castigadas y reclusos por el absolutismo real. La conciencia ciudadana reclama que se separen a los criminales, delincuentes y mendigos, que irían a centros penitenciarios, de los locos, dementes y deficientes, -que serían recogidos en asilos-, comenzando así otro tipo de reclusión de estas personas, para las que, algunos científicos de la época, entre ellos Pinel, reclaman un trato más humano, dándoles una nueva dimensión a estos centros de internamiento. Pinel es reconocido como un precursor de la «ergoterapia» o terapia por medio del trabajo manual, que tanto se desarrollaría en estos asilos a lo largo del siglo XIX, coexistiendo con otros métodos «terapéuticos» del momento (aislamiento, cadenas y duchas).

Es en este siglo XIX, gracias a los avances en el campo social y en la medicina, cuando comienza a aplicarse el concepto de enfermedad mental para locos y dementes, siendo esta ciencia, la medicina, la que acota el término deficiencia mental, diferenciándolo del de demencia, señalándose los fi-

nales de este siglo XIX como el de la aparición de la figura social del deficiente mental. Encontrando en el pensamiento ilustrado un buen caldo de cultivo que propició, en la primera mitad del siglo XIX, una época de optimismo en el ser humano, al empezar a considerarse, por ejemplo, al retrasado mental como inmaduro, incompleto en su desarrollo, débil mental, al que se puede corregir con un entrenamiento especial a través de los sentidos. Se puede decir que fue esta una época de claroscuros, de abrirse a unas actitudes socialmente positivas de cara a educar y adiestrar a estos individuos «desafortunados» que necesitaban ayuda y a los que se internaba en unas instituciones que «curaban» y desarrollaban programas de entrenamiento y capacitación, pero que en el fondo escondían el mismo «miedo irracional que desde el siglo XVII había llevado a los sensatos a encerrar a los insensatos».

Con el paso de los años, la masificación de estas instituciones cambió sus pretendidas funciones terapéuticas y educativas por otras más asistenciales y de reclusión; el ingreso de personas cada vez más gravemente afectadas y el auge de las teorías de selección de la especie de Darwin (1859), promueven un cambio de actitud hacia estas personas y su tratamiento.

A finales del siglo XIX y principios del XX, se realizaron trabajos dentro de las teorías del «Darvinismo social», Goddard, Galtón, Darwin,

Howe, trabajan y divulga la teoría de la Eugenesia, cría selectiva en búsqueda de rasgos deseables que llevada a la especie humana proponía, por una parte, evitar la reproducción de los sujetos retrasados popularizando la esterilización, o la reclusión (segregación por sexos al menos en sus años reproductores); y por otra, fomentar la procreación de los más capacitados. Sus teorías calaron en la sociedad de su tiempo y así, las instituciones asumieron esa tarea de recluir y aislar a los retrasados mentales del resto de la sociedad, al mismo tiempo en los países Escandinavos y en casi todos los Estados Unidos de América de 1907 a 1926 se promulgan leyes autorizando la esterilización de las personas retrasadas.

En 1838, se publica en Francia la Ley del Internamiento Voluntario en Centros Psiquiátricos, origen, en muchos aspectos, de los actuales psiquiátricos. Esta Ley establece una estrecha relación entre la fuerza pública y la institución psiquiátrica: un certificado médico y un documento de identidad bastaban para internar a una persona.

Malos tiempos estos, de finales y comienzo de siglo, para las personas con discapacidad. No obstante, y a pesar de ello, las primeras clases de perfeccionamiento se abren en Alemania en 1863; en América se crea la primera escuela para personas retrasadas en 1896 en Providencie, Rhode Irland; en Francia, en 1907; en el Estado de Nueva

Jersey, en 1905, se da el primer programa de capacitación para maestros de los retrasados mentales, y la educación especial nace con Dewey, Decroly, Montessori,...

La Gran Depresión americana de los años 30 y las ideas sociales que siguieron a las políticas de ayuda, seguridad social y beneficencia, que alcanzaron a todos los indigentes, benefició también a los sujetos con discapacidad, aunque será en la década de los 50 y con la euforia de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos cambios de actitud empiezan a tener reflejos prácticos y positivos en la historia de la discapacidad en general y de las personas con discapacidad intelectual en particular, sobre todo en los Estados Unidos de América. En 1950 se crea la «National Association for Retarded Children» (NARC); con su empuje, la mayoría de los estados promulgan leyes que imponen a los distritos escolares la obligación de proporcionar educación especial y de calidad a todos aquellos que se pudieran beneficiar de ella, disponiendo de los fondos necesarios.

El movimiento internacional en favor de la desinstitucionalización de las personas con retraso mental que empezó en los años 50 tuvo connotaciones sociales que se aprecian distintas según los colectivos y según los efectos producidos por ese desalojo indiscriminado de los psiquiátricos sin haber preparado antes las alternativas de asistencia, atención y tratamiento de estas personas.

Este fenómeno desencadenó un conjunto de conflictos y reacciones negativas sobre todo en lo referido a las personas con enfermedad mental. En 1984, la Asociación Americana de Psiquiatría publicó un informe de la situación calificándola como «una gran tragedia social». Miguel Angel Verdugo (1993) afirma «El pretendido carácter progresista de la desinstitucionalización se tradujo en una lesión de los derechos a la atención y tratamiento adecuado de muchos enfermos mentales».

Especial significación y protagonismo legislativo se alcanzó en los años setenta en materia de educación en los países más desarrollados, coincidiendo con el nacimiento de asociaciones y entidades que dotaron al movimiento asociativo de gran fuerza reivindicativa, como comentamos a continuación.

En los Estados Unidos de América, los años 70 comienzan con la aprobación por el Congreso de la Ley de Servicios para Incapacidades de Desarrollo y de Construcción de Instalaciones y siguen en 1975 con la Ley de Educación para Todos los Niños Incapacitados continuando con el desarrollo de programas ventajosos para los deficientes; seguridad social, rehabilitación laboral, etc.; pero también significó la lucha de los padres y asociaciones por sus derechos en los tribunales de justicia. De gran importancia y repercusión fue el juicio que un grupo de padres entabló en defensa de

13 niños retrasados mentales que habían sido «excluidos» de la educación estatal, «Pennsylvania Association of Retarded Children versus Commonwealth of Pennsylvania». El tribunal dictaminó entre otros aspectos «Que todos los niños, inclusive los más severamente retrasados, tenían derecho a una educación pública gratuita, y dio órdenes al Estado de que identificara y se pusiera en contacto con todos los niños que habían sido excluidos anteriormente y que los integrara a partir del siguiente año escolar». «Que a cada niño se le colocara en el programa que mejor respondiera a sus necesidades». «Que a ningún niño se le podía colocar en ninguna clase especial o retirarlo de una clase especial para colocarlo en una clase regular sin el consentimiento expreso de los padres del niño «.

Podemos reseñar que esta progresiva implantación de los principios de integración en el ámbito educativo se expande por todos los países occidentales.

Dinamarca, Noruega y Suecia pueden considerarse como los pioneros a niveles institucionales en la aplicación práctica de los principios de normalización al ámbito educativo. Son países con desarrollados sistemas de atención asistencial, social y educativa, y la suficiencia de recursos materiales y humanos en los centros ordinarios con los que favorecieron el desarrollo de la integración escolar. En 1959 se incorporó el princi-

pio de Normalización a la legislación danesa, y Neils E. Bank Mikkkelsen (director de los Servicios para Deficientes Mentales en Dinamarca), lo definió como «la posibilidad de que el deficiente desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible». De histórica es considerada la aprobación por el Parlamento Sueco en 1968 de la Ley de Normalización. Bengt Nirje, (Director de la Asociación Sueca pro Niños Deficientes) entiende la Normalización como «La incorporación en la vida diaria del subnormal, de unas pautas y condiciones lo más parecidas posible, a las consideradas como habituales de la sociedad. En Noruega, la Asamblea Nacional incorpora una legislación integradora referente a Educación Especial a la Ley General de Educación.

Francia, con la ley de Orientación de 1975, consagra los principios de integración y normalización, y establece una serie de estructuras que asistirán a los niños con deficiencias, desde los centros de Acción Médico - Social Precoz hasta las Comisiones Técnicas de Orientación Profesional, pasando por las Comisiones Departamentales de Educación Especial. Estas estructuras aconsejarán y proporcionarán ayudas públicas a los deficientes y sus familias desde el nacimiento, y también en lo referente a escuelas y empleo.

Inglaterra promulga en 1970 una Ley de Educación Especial, basada en la ley de Educación de 1944, que obliga a la escolarización de todos los

alumnos, incluso los más gravemente afectados. La integración de los alumnos con deficiencias en las escuelas ordinarias la establecerá la Ley de Educación de 1976. Pero será en 1978 con la publicación del informe Warnock, importante punto de referencia en esta cuestión, cuando se ofrezcan soluciones prácticas a toda la diversidad de alumnos. Ya en 1981 con la promulgación del Acta de Educación se recomiendan programas educativos basados en las necesidades educativas del niño, y no en el déficit, y se amplían las ayudas y apoyos de la educación especial incluso a los alumnos con dificultades de aprendizaje.

Italia se adelanta a los países de su entorno al establecer en la Ley de 1971, la integración de los alumnos en el sistema común de escolarización al mismo tiempo que mantenía la educación especial y, aunque en años sucesivos fue regulando con decretos los ratios de profesores y alumnos «normales» y «deficientes» en las escuelas ordinarias, la formación del profesorado así como la financiación de la integración. Sus estrategias de implosión de la integración, produjeron entonces situaciones dispares en las actitudes del profesorado y de la sociedad, y ello pese al buen caldo de cultivo que desde los años 60 tanto la política de integración social en contra de la segregación como los movimientos antipsiquiátricos habían conseguido.

Portugal en 1973, promulga la Ley de Reforma del Sistema de Enseñanza, con una Educación Especial incorporada al sistema ordinario, pero no integrada. En 1979 promulga un decreto - ley que marca los objetivos de la Educación Especial, su gratuidad y obligatoriedad desde los 6 a los 14 años. Inspirado en el sistema inglés, sigue una organización similar.

Importante aportación a las personas con discapacidad es su Constitución de 1976, «basada en la dignidad de la persona y en la voluntad popular, y comprometida en la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria», especialmente su artículo. 71, en sus tres apartados; 1) sobre los ciudadanos portadores de deficiencia, quienes «gozan plenamente de los derechos y deberes consignados en su Constitución, con reserva del ejercicio o del cumplimiento de aquellos para los que se encuentren incapacitados»; 2) donde el Estado se obliga a «realizar una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración» con estos ciudadanos y «de apoyo a sus familias», además de «desarrollar una pedagogía de sensibilización a la sociedad, en cuanto a los deberes de respeto y solidaridad para con ellos». (Aspectos, estos últimos muy novedosos para su tiempo y de gran calado en el momento actual). También adquiere el Estado la responsabilidad de hacer efectiva la realización de sus derechos sin perjuicio de los derechos y deberes de los padres o tutores.; 3) donde se

reconoce el valor del asociacionismo «El Estado apoya a las organizaciones de ciudadanos portadores de deficiencia».

Bajo este paraguas constitucional, se sigue legislando, y en los últimos años, se promulgan importantes leyes, recogidas en esta obra que prologamos, como las de promoción de la accesibilidad a la información, televisión, salud mental, destacando la Ley 38/2004 de 18/08 que define las bases generales del régimen jurídico de prevención, habilitación, rehabilitación de personas con deficiencia que en su Art. 1 define el concepto de deficiencia y en los Art. 4 al 15, explicita los principios fundamentales en los que se basa; singularidad, ciudadanía, no discriminación, autonomía, información, participación, globalidad, calidad, responsabilidad pública, transversalidad, cooperación y solidaridad.

En España, estos mismos años 70 comenzaron con la aprobación de la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, (1970), que introduce la Educación Especial como una modalidad propia dentro del sistema educativo. En 1978 la Constitución Española consagra en los artículos 14 y 27 los principios de una educación para Todos en Igualdad y para el pleno desarrollo de la personalidad humana, y en el 49 se declara que «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sen-



soriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a los ciudadanos».

El desarrollo de la Constitución, lleva en 1982 a la promulgación de la LISMI. Ley de Integración Social de los Minusválidos, que dará cobertura y desarrollo a los principios de integración y normalización

Siguiendo con la ejemplificación en educación, mención especial merece la LOGSE, (1990) Ley de Ordenación General del Sistema educativo, uno de cuyos ejes vertebradores era la atención a la diversidad y el respeto a las diferencias individuales y supone un salto cualitativo al introducir en el ordenamiento jurídico el concepto de alumno con necesidades educativas especiales, y que continúa aunque adaptándose a los nuevos tiempos en la actual LOE. Ley Orgánica de Educación (2006).

Podemos reseñar que en la década de los años 70, como acabamos de ver, hubo una gran explosión legislativa en materia de educación para la discapacidad en los distintos países europeos, que continua y cristaliza a nivel mundial, ampliándose a otros ámbitos.

Entre las iniciativas mundiales más importantes llevadas a cabo, por Naciones Unidas, en los últimos 30 años, y cómo precursores señalamos El Año Internacional de los Impedidos (1981) y



su posterior Programa de Acción Mundial para los Impedidos (1983), y sus encadenados complementos en el tiempo; el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983 – 1992) y el Decenio de las personas con discapacidad de Asia y el Pacífico (1993- 2002). En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las personas con discapacidad. Un nuevo hito se perfila de apoyo a este largo proceso en 2006 con la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En la agenda de los derechos humanos está enraizado el derecho a la educación y así, como consecuencia de la Convención de los Derechos del Niño y en su misión de promover el desarrollo internacional de éstos, se organizan determinados eventos en España como la Conferencia Mundial sobre estrategias de Acción para la Educación, Prevención y Rehabilitación en Torremolinos (1981), en el marco del año Internacional de las personas con Discapacidad promovido por Naciones Unidas y la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad (UNESCO, 1994), conocida como la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción que supuso en su momento y sigue siendo hoy día la más importante y clara apuesta por la inclusión educativa y que fue adaptado por unanimidad por los re-

presentantes de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales.

El reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea. En 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas de de los Estados miembros: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo de los sistemas que se implanten. El año 2003 fue declarado por la Unión Europea año Europeo de las Personas con Discapacidad, y en España las entidades representativas del Sector aglutinadas en torno al CERMI (Comité Español de Representantes de Discapacitados), proponían alcanzar un Pacto de Estado que orientara las políticas públicas sobre las personas con discapacidad para la próxima década (2004 – 2014), situando la discapacidad en la esfera de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como a la persona con discapacidad como titular de derechos sociales con las notas de universalidad, exigibilidad y equidad. Actualmente está en vigor y en proceso de desarrollo la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Sirva este breve recorrido histórico para sugerirnos algunas consideraciones y reflexiones:

-La historia de la discapacidad es una historia de luces y sombras, de avances y retrocesos, pero con posibilidad permanente de mejora, lo que nos lleva a aprovechar estos tiempos favorables para legislar mejor, equilibrando la perdurabilidad y sostenibilidad de las leyes y su tendencia a la mejora

-El sentido de pertenencia a un mundo mejor y solidario, nos debe mover a luchar por el cambio en todos los países, reconociendo que existen países con distintos ritmos de maduración y desarrollo legislativo, lo que nos lleva a conectarnos en un objetivo común, para que tanto personas como entidades y organizaciones nacionales e internacionales ofrezcan ayudas a la cooperación y al conocimiento y apoyos al resto, porque unidos somos mucho más fuertes.

-Sabido es que las leyes en el papel lo «aguantan todo», pero habrá que esforzarse en trabajar la cultura del seguimiento continuo para evaluar su incidencia en el bienestar de las personas con discapacidad y en la mejora de su entorno con indicadores de calidad, que nos hablen de generalizar ese beneficio al resto de la sociedad, mayores, niños, población marginada, para que las grandes declaraciones lleven incluidas los mecanismos para su aplicabilidad, sean vinculantes, permeables a las actuaciones concretas sin grandes dilaciones.

-Estamos ante una oportunidad única, ante uno de esos extraordinarios hitos que hacen dar pasos de gigantes a la humanidad en su camino hacia la justicia y la igualdad entre los seres humanos, como es la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2006, y a la que se están adhiriendo los distintos países, en un proceso que hay que acelerar y culminar cuanto antes.



-Ante esta situación, en las asociaciones de personas con discapacidad, tenemos mucho trabajo que hacer; al principio en campos muy concretos, como la publicidad, mentalización y formación, sabiendo que estamos sembrando para recoger, después asumiendo esos derechos desde el compromiso, reclamando la dotación de medios para su desarrollo y posteriormente ejercitándolos; haciéndolos cumplir, vigilando su correcto funcionamiento y denunciando llegado el caso, como ocurrió en Pennsylvania, su incumplimiento, dejadez o desidia.

-En este proceso estamos implicados todos desde el mismo día de su entrada en vigor, responsabilizándonos en nuestros respectivos países del impulso y la tutorización de las distintas fases del proceso. Porque una empresa de esta magnitud sólo puede salir adelante con el empuje solidario de todos. Es tarea común tanto de administraciones estatales, autonómicas y lo-

cales como de entidades y asociaciones, y no sólo del sector de la discapacidad, sino también de los distintos representantes del tejido social, sindicatos, empresarios, universidades, distintas ONGs del sector, etc. En definitiva salir adelante, avanzar con el esfuerzo y la complicidad de una sociedad viva, positiva y solidaria.

-Especial responsabilidad dinamizadora y formadora, deberán asumir los organismos, públicos y/o privados, que tienen encomendadas directa o indirectamente funciones en el campo de la discapacidad y el derecho. Un buen ejemplo lo tendríamos fomentando iniciativas como éste proyecto a cargo de FUTUEX (Fundación Tutelar de Extremadura) Fundación AEQUITAS y Fundación Academia Europea de Yuste, en el marco del Congreso Permanente sobre Discapacidad y Derechos Humanos, que lanza el Congreso Permanente que dirige esta publicación, entendido que juntos, con el trabajo común y coordinado otro mundo mejor es posible.

En cuanto a su desarrollo, en estos momentos corresponderá a algunas entidades liderar: A) la planificación de una estrategia de despliegue global de los derechos a nivel de Naciones Unidas y Comunidad Europea y otras estrategias específicas a nivel de países y comunidades autonómicas. B) Poner en marcha planes de comunicación y formación, y C) Elaborar materiales de apoyo, entre los que consideramos esta co-



lección legislativa como un ejemplo - palanca, eslabón o peldaño para avanzar y seguir construyendo y ejercitando derechos.

En definitiva: La historia de la humanidad contiene la historia de la discapacidad, y nuestra historia más reciente es una lucha, abandonada por el movimiento asociativo por pasar de la caridad a lo derechos, del déficit a las capacidades, de la segregación a la inclusión, de la dependencia a la vida independiente, de la discriminación a la igualdad de trato y oportunidades. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad supone una victoria para la humanidad que viene a reforzar esos ideales, convencidos de que una sociedad inclusiva y plural es una sociedad más justa y solidaria.

«Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.»

Artigo 1.º (República Portuguesa)

Manuel López Risco





1) Breve descripción del sistema legal

Portugal, oficialmente la República Portuguesa, es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido como un estado democrático de derecho. Su territorio, con capital en Lisboa, está situado en el sudoeste de Europa, en la Península Ibérica. Limita al este y al norte con España, y al sur y oeste con el océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y de Madeira, situados en el hemisferio norte del océano Atlántico, además del archipiélago deshabitado de las Islas Salvajes, al sur de Madeira.

A) Estructura del Estado

Portugal es una República encabezada por un presidente elegido democráticamente para un periodo de cinco años. El presidente de la República nombra al primer ministro, que es el jefe



administrativo oficial del país. El primer ministro preside un gabinete formado por 15 ministros.

Poder legislativo

El Parlamento unicameral, denominado Asamblea de la República, posee el poder legislativo y la capacidad de elegir al primer ministro. Sus 230 miembros son elegidos a su vez por medio de un sistema de representación proporcional y desempeñan su cargo durante un periodo de cuatro años.

Poder judicial

El sistema judicial de Portugal está encabezado por el Tribunal Supremo, compuesto por un presidente y 29 jueces. Por debajo están los tribunales de apelación y los tribunales ordinarios y especiales de distrito.

Gobierno local.

Los gobernadores de distrito y las asambleas legislativas de distrito son la máxima autoridad a nivel local. El distrito, a su vez, está subdividido en concelhos (municipios), cada uno de los cuales cuenta con un ayuntamiento democráticamente elegido. Los concelhos portugueses, que suman 250, están integrados por freguesias.

B) Constituição de Portugal

Artigo 1.º (República Portuguesa)

Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Artigo 2.º (Estado de direito democrático)

A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.

Artigo 6.º (Estado unitário)

1. O Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização democrática da Administração Pública.

2. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio.

(...)

Artigo 71º (Cidadãos portadores de deficiência)

1. Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados.

2. O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efectiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores.

3. O Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de deficiência.

2)Concepto de discapacidad y de persona con discapacidad

Lei n.º 38/2004 de 18 de Agosto Define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência

Artigo 2º Noção

Considera-se pessoa com deficiência aquela que, por motivo de perda ou anomalia, congénita

ou adquirida, de funções ou de estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades específicas susceptíveis de, em conjugação com os factores do meio, lhe limitar ou dificultar a actividade e a participação em condições de igualdade com as demais pessoas.

Princípios fundamentais

Artigo 4º Princípio da singularidade

À pessoa com deficiência é reconhecida a singularidade, devendo a sua abordagem ser feita de forma diferenciada, tendo em consideração as circunstâncias pessoais.

Artigo 5º Princípio da cidadania

A pessoa com deficiência tem direito ao acesso a todos os bens e serviços da sociedade, bem como o direito e o dever de desempenhar um papel activo no desenvolvimento da sociedade.

Artigo 6º Princípio da não discriminação

1 — A pessoa não pode ser discriminada, directa ou indirectamente, por acção ou omissão, com base na deficiência.

2 — A pessoa com deficiência deve beneficiar de medidas de acção positiva com o objectivo de garantir o exercício dos seus direitos e deveres corrigindo uma situação factual de desigualdade que persista na vida social.

Artigo 7º Princípio da autonomia

A pessoa com deficiência tem o direito de decisão pessoal na definição e condução da sua vida.

Artigo 8º Princípio da informação

A pessoa com deficiência tem direito a ser informada e esclarecida sobre os seus direitos e deveres.

Artigo 9º Princípio da participação

A pessoa com deficiência tem o direito e o dever de participar no planeamento, desenvolvimento e acompanhamento da política de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência.

Artigo 10º Princípio da globalidade

A pessoa com deficiência tem direito aos bens e serviços necessários ao seu desenvolvimento ao longo da vida.

Artigo 11º Princípio da qualidade

A pessoa com deficiência tem o direito à qualidade dos bens e serviços de prevenção, habilitação e reabilitação, atendendo à evolução da técnica e às necessidades pessoais e sociais.

Artigo 12º Princípio do primado da responsabilidade pública

Ao Estado compete criar as condições para a execução de uma política de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência.

Artigo 13º Princípio da transversalidade

A política de prevenção, habilitação, reabi-

litação e participação da pessoa com deficiência deve ter um carácter pluridisciplinar e ser desenvolvida nos diferentes domínios de forma coerente e global.

Artigo 14º Princípio da cooperação

O Estado e as demais entidades públicas e privadas devem actuar de forma articulada e cooperar entre si na concretização da política de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência.

Artigo 15º Princípio da solidariedade

Todos os cidadãos devem contribuir para a prossecução da política de prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência.

Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto, Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde.

Artigo 3º Conceitos

Para efeitos da presente lei, entende-se por:
(...)

c) «Pessoas com risco agravado de saúde» pessoas que sofrem de toda e qualquer patologia que determine uma alteração orgânica ou funcional irreversível, de longa duração, evolutiva, potencialmente incapacitante, sem perspectiva de remissão completa e que altere a qualidade de vida do portador a nível físico, mental, emo-

cional, social e económico e seja causa potencial de invalidez precoce ou de significativa redução de esperança de vida;

3) Régimen general de capacidad jurídica

Código Civil Português (Actualizado até à Lei 59/99, de 30/06) Decreto-Lei N° 47 344, de 25 de Novembro de 1966

A) Reglas de derecho internacional privado

ARTIGO 14° (Condição jurídica dos estrangeiros)

1. Os estrangeiros são equiparados aos nacionais quanto ao gozo de direitos civis, salvo disposição legal em contrário.

2. Não são, porém, reconhecidos aos estrangeiros os direitos que, sendo atribuídos pelo respectivo Estado aos seus nacionais, o não sejam aos portugueses em igualdade de circunstâncias.

(...)

ARTIGO 25° (Âmbito da lei pessoal)

O estado dos indivíduos, a capacidade das pessoas, as relações de família e as sucessões por morte são regulados pela lei pessoal dos respectivos sujeitos, salvas as restrições estabelecidas na presente secção.

ARTIGO 26º (Início e termo da personalidade jurídica)

1. O início e termo da personalidade jurídica são fixados igualmente pela lei pessoal de cada indivíduo.

2. Quando certo efeito jurídico depender da sobrevivência de uma a outra pessoa e estas tiverem leis pessoais diferentes, se as presunções de sobrevivência dessas leis forem inconciliáveis, é aplicável o disposto no nº 2 do artigo 68º.

ARTIGO 27º (Direitos de personalidade)

1. Aos direitos de personalidade, no que respeita à sua existência e tutela e às restrições impostas ao seu exercício, é também aplicável a lei pessoal.

2. O estrangeiro ou apátrida não goza, porém, de qualquer forma de tutela jurídica que não seja reconhecida na lei portuguesa.

ARTIGO 28º (Desvios quanto às consequências da incapacidade)

1. O negócio jurídico celebrado em Portugal por pessoa que seja incapaz segundo a lei pessoal competente não pode ser anulado com fundamento na incapacidade no caso de a lei interna portuguesa, se fosse aplicável, considerar essa pessoa como capaz.

2. Esta exceção cessa, quando a outra parte tinha conhecimento da incapacidade, ou quando o negócio jurídico for unilateral, pertencer ao domínio do direito da família ou das sucessões ou respeitar à disposição de imóveis situados no estrangeiro.

3. Se o negócio jurídico for celebrado pelo incapaz em país estrangeiro, será observada a lei desse país, que consagrar regras idênticas às fixadas nos números anteriores.

ARTIGO 29º (Maioridade)

A mudança da lei pessoal não prejudica a maioridade adquirida segundo a lei pessoal anterior.

ARTIGO 30º (Tutela e institutos análogos)

À tutela e institutos análogos de protecção aos incapazes é aplicável a lei pessoal do incapaz.

(...)

ARTIGO 33º (Pessoas colectivas)

1. A pessoa colectiva tem como lei pessoal a lei do Estado onde se encontra situada a sede principal e efectiva da sua administração.

2. À lei pessoal compete especialmente regular: a capacidade da pessoa colectiva; a constituição, funcionamento e competência dos seus órgãos; os modos de aquisição e perda da qualidade de associado e os correspondentes direitos e deveres; a responsabilidade da pessoa colectiva, bem como a dos respectivos órgãos e membros, perante terceiros; a transformação, dissolução e extinção da pessoa colectiva.

3. A transferência, de um Estado para outro, da sede da pessoa colectiva não extingue a personalidade jurídica desta, se nisso convierem as leis de uma e outra sede.

4. A fusão de entidades com lei pessoal diferente é apreciada em face de ambas as leis pessoais.

(...)

ARTIGO 37º (Representação legal)

A representação legal está sujeita à lei reguladora da relação jurídica de que nasce o poder representativo.

ARTIGO 38º (Representação orgânica)

A representação da pessoa colectiva por intermédio dos seus órgãos é regulada pela respectiva lei pessoal.

ARTIGO 39º (Representação voluntária)

1. A representação voluntária é regulada, quanto à existência, extensão, modificação, efeitos e extinção dos poderes representativos, pela lei do Estado em que os poderes são exercidos.

2. Porém, se o representante exercer os poderes representativos em país diferente daquele que o representado indicou e o facto for conhecido do terceiro com quem contrate, é aplicável a lei do país da residência habitual do representado.

3. Se o representante exercer profissionalmente a representação e o facto for conhecido do terceiro contratante, é aplicável a lei do domicílio profissional.

4. Quando a representação se refira à disposição ou administração de bens imóveis, é aplicável a lei do país da situação desses bens.

(...)

ARTIGO 47º (Capacidade para constituir direitos reais sobre coisas imóveis ou sobre eles)

É igualmente definida pela lei da situação da coisa a capacidade para constituir direitos reais

sobre coisas imóveis ou para dispor deles, desde que essa lei assim o determine; de contrário, é aplicável a lei pessoal.

(...)

ARTIGO 49° (Capacidade para contrair casamento ou celebrar convenções antenupciais)

A capacidade para contrair casamento ou celebrar a convenção antenupcial é regulada, em relação a cada nubente, pela respectiva lei pessoal, à qual compete ainda definir o regime da falta e dos vícios da vontade dos contraentes.

(...)

ARTIGO 63° (Capacidade de disposição)

1. A capacidade para fazer, modificar ou revogar uma disposição por morte, bem como as exigências da forma especial das disposições por virtude da idade do disponente, são reguladas pela lei pessoal do autor ao tempo da declaração.

2. Aquele que, depois de ter feito a disposição, adquirir nova lei pessoal conserva a capacidade necessária para revogar a disposição nos termos da lei anterior.

B) Personalidad y capacidad jurídica

ARTIGO 66° (Começo da personalidade)

1. A personalidade adquire-se no momento do nascimento completo e com vida.

2. Os direitos que a lei reconhece aos nascituros dependem do seu nascimento.

ARTIGO 67º (Capacidade jurídica)

As pessoas podem ser sujeitos de quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua capacidade jurídica.

ARTIGO 69º (Renúncia à capacidade jurídica)

Ninguém pode renunciar, no todo ou em parte, à sua capacidade jurídica.

(...)

ARTIGO 81º (Limitação voluntária dos direitos de personalidade)

1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária aos princípios da ordem pública.

2. A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda que com obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra parte.

(...)

ARTIGO 85º (Domicílio legal dos menores e interditos)

1. O menor tem domicílio no lugar da residência da família; se ela não existir, tem por domicílio o do progenitor a cuja guarda estiver.

2. O domicílio do menor que em virtude de decisão judicial foi confiado a terceira pessoa ou a estabelecimento de educação ou assistência é o do progenitor que exerce o poder paternal.

3. O domicílio do menor sujeito a tutela e do interdito é o do respectivo tutor.

4. Quando tenha sido instituído o regime de administração de bens, o domicílio do menor ou do interdito é o do administrador, nas relações a que essa administração se refere.

5. Não são aplicáveis as regras dos números anteriores se delas resultar que o menor ou interdito não tem domicílio em território nacional.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

4) Régimen legal de incapacitación o limitación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad

A) De los menores (Condição jurídica dos menores)

ARTIGO 122° (Menores)

É menor quem não tiver ainda completado dezoito anos de idade.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

ARTIGO 123° (Incapacidade dos menores)

Salvo disposição em contrário, os menores carecem de capacidade para o exercício de direitos.

ARTIGO 124° (Suprimento da incapacidade dos menores)

A incapacidade dos menores é suprida pelo poder paternal e, subsidiariamente, pela tutela, conforme se dispõe nos lugares respectivos.

ARTIGO 125º (Anulabilidade dos actos dos menores)

1. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 287º, os negócios jurídicos celebrados pelo menor podem ser anulados:

a) A requerimento, conforme os casos, do progenitor que exerça o poder paternal, do tutor ou do administrador de bens, desde que a acção seja proposta no prazo de um ano a contar do conhecimento que o requerente haja tido do negócio impugnado, mas nunca depois de o menor atingir a maioridade ou ser emancipado, salvo o disposto no artigo 131º;

b) A requerimento do próprio menor, no prazo de um ano a contar da sua maioridade ou emancipação;

c) A requerimento de qualquer herdeiro do menor, no prazo de um ano a contar da morte deste, ocorrida antes de expirar o prazo referido na alínea anterior.

2. A anulabilidade é sanável mediante confirmação do menor depois de atingir a maioridade ou ser emancipado, ou por confirmação do progenitor que exerça o poder paternal, tutor ou administrador de bens, tratando-se de acto que algum deles pudesse celebrar como representante do menor.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

ARTIGO 126º (Dolo do menor)

Não tem o direito de invocar a anulabilidade

o menor que para praticar o acto tenha usado de dolo com o fim de se fazer passar por maior ou emancipado.

ARTIGO 127º (Excepções à incapacidade dos menores)

1. São excepcionalmente válidos, além de outros previstos na lei:

a) Os actos de administração ou disposição de bens que o maior de dezasseis anos haja adquirido por seu trabalho;

b) Os negócios jurídicos próprios da vida corrente do menor que, estando ao alcance da sua capacidade natural, só impliquem despesas, ou disposições de bens, de pequena importância;

c) Os negócios jurídicos relativos à profissão, arte ou ofício que o menor tenha sido autorizado a exercer, ou os praticados no exercício dessa profissão, arte ou ofício.

2. Pelos actos relativos à profissão, arte ou ofício do menor e pelos actos praticados no exercício dessa profissão, arte ou ofício só respondem os bens de que o menor tiver a livre disposição.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

ARTIGO 128º (Dever de obediência)

Em tudo o quanto não seja ilícito ou imoral, devem os menores não emancipados obedecer a seus pais ou tutor e cumprir os seus preceitos.

ARTIGO 129º (Termo da incapacidade dos menores)

A incapacidade dos menores termina quando eles atingem a maioridade ou são emancipados, salvas as restrições da lei.

ARTIGO 130° (Efeitos da maioridade)

Aquele que perfizer dezoito anos de idade adquire plena capacidade de exercício de direitos, ficando habilitado a reger a sua pessoa e a dispor dos seus bens.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

ARTIGO 131° (Pendência da acção de interdição ou inabilitação)

Estando, porém, pendente contra o menor, ao atingir a maioridade, acção de interdição ou inabilitação, manter-se-á o poder paternal ou a tutela até ao trânsito em julgado da respectiva sentença.

ARTIGO 132° (Emancipação)

O menor é, de pleno direito, emancipado pelo casamento.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

ARTIGO 133° (Efeitos da emancipação)

A emancipação atribui ao menor plena capacidade de exercício de direitos, habilitando-o a reger a sua pessoa e a dispor livremente dos seus bens como se fosse maior, salvo o disposto no artigo 1649°.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

B) Interdicciones (Interdições)

ARTIGO 138° (Pessoas sujeitas a interdição)

1. Podem ser interditos do exercício dos seus direitos todos aqueles que por anomalia psíquica, surdez-mudez ou cegueira se mostrem incapazes de governar suas pessoas e bens.

2. As interdições são aplicáveis a maiores; mas podem ser requeridas e decretadas dentro do ano anterior à maioridade, para produzirem os seus efeitos a partir do dia em que o menor se torne maior.

(Redacção do Dec.-Lei 496/77, de 25-11)

ARTIGO 139° (Capacidade do interdito e regime da interdição)

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes, o interdito é equiparado ao menor, sendo-lhe aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições que regulam a incapacidade por menoridade e fixam os meios de suprir o poder paternal.

ARTIGO 140° (Competência dos tribunais comuns)

Pertence ao tribunal por onde corre o processo de interdição a competência atribuída ao tribunal de menores nas disposições que regulam o suprimimento do poder paternal.

ARTIGO 141° (Legitimidade)

1. A interdição pode ser requerida pelo cônjuge do interditando, pelo tutor ou curador deste, por qualquer parente sucessível ou pelo Ministério Público.

2. Se o interditando estiver sob o poder paternal, só têm legitimidade para requerer a interdição os progenitores que exercerem aquele poder e o Ministério Público.

ARTIGO 142º (Providências provisórias)

1. Em qualquer altura do processo pode ser nomeado um tutor provisório que celebre em nome do interditando, com autorização do tribunal, os actos cujo adiamento possa causar-lhe prejuízo.

2. Pode também ser decretada a interdição provisória, se houver necessidade urgente de providenciar quanto à pessoa e bens do interditando.

ARTIGO 143º (A quem incumbe a tutela)

1. A tutela é deferida pela ordem seguinte:

a) Ao cônjuge do interdito, salvo se estiver separado judicialmente de pessoas e bens ou separado de facto por culpa sua, ou se for por outra causa legalmente incapaz;

b) À pessoa designada pelos pais ou pelo progenitor que exercer o poder paternal, em testamento ou documento autêntico ou autenticado;

c) A qualquer dos progenitores do interdito que, de acordo com o interesse deste, o tribunal designar;

d) Aos filhos maiores, preferindo o mais velho, salvo se o tribunal, ouvido o conselho de família, entender que algum dos outros dá maiores garantias de bom desempenho do cargo.

2. Quando não seja possível ou razões

ponderosas desaconselhem o deferimento da tutela nos termos do número anterior, cabe ao tribunal designar tutor, ouvido o conselho de família.

ARTIGO 144º (Exercício do poder paternal)

Recaindo a tutela no pai ou na mãe, exercem estes o poder paternal como se dispõe nos artigos 1878º e seguintes.

ARTIGO 145º (Dever especial do tutor)

O tutor deve cuidar especialmente da saúde do interdito, podendo para esse efeito alienar os bens deste, obtida a necessária autorização judicial.

ARTIGO 146º (Escusa da tutela e exoneração do tutor)

1. O cônjuge do interdito, bem como os descendentes ou ascendentes deste, não podem escusar-se da tutela, nem ser dela exonerados, salvo se tiver havido violação do disposto no artigo 143º.

2. Os descendentes do interdito podem, contudo, ser exonerados a seu pedido ao fim de cinco anos, se existirem outros descendentes igualmente idóneos para o exercício do cargo.

ARTIGO 147º (Publicidade da interdição)

À sentença de interdição definitiva é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 1920º-B e 1920º-C.(1)

ARTIGO 148º (Actos do interdito posteriores ao registo da sentença)

São anuláveis os negócios jurídicos celebrados

pelo interdito depois do registo da sentença de interdição definitiva.

ARTIGO 149º (Actos praticados no decurso da acção)

1. São igualmente anuláveis os negócios jurídicos celebrados pelo incapaz depois de anunciada a proposição da acção nos termos da lei de processo, contanto que a interdição venha a ser definitivamente decretada e se mostre que o negócio causou prejuízo ao interdito.

2. O prazo dentro do qual a acção de anulação deve ser proposta só começa a contar-se a partir do registo da sentença.

ARTIGO 150º (Actos anteriores à publicidade da acção)

Aos negócios celebrados pelo incapaz antes de anunciada a proposição da acção é aplicável o disposto acerca da incapacidade acidental.

ARTIGO 151º (Levantamento da interdição)

Cessando a causa que determinou a interdição, pode esta ser levantada a requerimento do próprio interdito ou das pessoas mencionadas no nº 1 do artigo 141º.

C) Inhabilitaciones (Inabilitações)

ARTIGO 152º (Pessoas sujeitas a inabilitação)

Podem ser inabilitados os indivíduos cuja anomalia psíquica, surdez-mudez ou cegueira, embora de carácter permanente, não seja de tal modo grave que justifique a sua interdição, assim como aqueles que, pela sua habitual prodigalidade ou pelo abuso de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes, se mostrem incapazes de reger convenientemente o seu património.

ARTIGO 153º (Suprimento da inabilidade)

1. Os inabilitados são assistidos por um curador, a cuja autorização estão sujeitos os actos de disposição de bens entre vivos e todos os que, em atenção às circunstâncias de cada caso, forem especificados na sentença.

2. A autorização do curador pode ser judicialmente suprida.

ARTIGO 154º (Administração dos bens do inabilitado)

1. A administração do património do inabilitado pode ser entregue pelo tribunal, no todo ou em parte, ao curador.

2. Neste caso, haverá lugar a constituição do conselho de família e designação do vogal que, como subcurador, exerça as funções que na tutela cabem ao protutor.

3. O curador deve prestar contas da sua administração.

ARTIGO 155º (Levantamento da inabilitação)

Quando a inabilitação tiver por causa a

prodigalidade ou o abuso de bebidas alcoólicas ou de estupefacientes, o seu levantamento não será deferido antes que decorram cinco anos sobre o trânsito em julgado da sentença que a decretou ou da decisão que haja desatendido um pedido anterior.

ARTIGO 156° (Regime supletivo)

Em tudo quanto se não ache especialmente regulado nesta subsecção é aplicável à inabilitação, com as necessárias adaptações, o regime das interdições.

(...)

ARTIGO 160° (Capacidade)

1. A capacidade das pessoas colectivas abran-ge todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes à prossecução dos seus fins.

2. Exceptuam-se os direitos e obrigações ve-dados por lei ou que sejam inseparáveis da per-sonalidade singular.

D) Del proceso de declaración de inca-pacidad y de inhabilitación

Código de processo civil do Portugal

Das interdições e inabilitações

ARTIGO 944.° (Petição inicial)

Na petição inicial da acção em que requeira a interdição ou inabilitação, deve o autor, depois de deduzida a sua legitimidade, mencionar os

factos reveladores dos fundamentos invocados e do grau de incapacidade do interditando ou inabilitando e indicar as pessoas que, segundo os critérios da lei, devam compor o conselho de família e exercer a tutela ou curatela.

ARTIGO 945.º (Publicidade da acção)

Apresentada a petição, se a acção estiver em condições de prosseguir, o juiz determina a afixação de editais no tribunal e na sede da junta de freguesia da residência do requerido, com menção do nome deste e do objecto da acção, e publicar-se-á, com as mesmas indicações, anúncio num dos jornais mais lidos na respectiva circunscrição judicial.

ARTIGO 946.º (Citação)

1. O requerido é citado para contestar, no prazo de 30 dias.

2. É aplicável à citação o disposto na parte geral; a citação por via postal não terá, porém, cabimento, salvo quando a acção se basear em mera prodigalidade do inabilitando.

ARTIGO 947.º (Representação do requerido)

1. Se a citação não puder efectuar-se, em virtude de o requerido se encontrar impossibilitado de a receber, ou se ele, apesar de regularmente citado, não tiver constituído mandatário no prazo de contestação, o juiz designa, como curador provisório, a pessoa a quem provavelmente competirá a tutela ou a curatela, que não seja o requerente,

que será citada para contestar em representação do requerido; não o fazendo, aplica-se o disposto no artigo 15.º.

2. Se for constituído mandatário judicial pelo requerido ou pelo respectivo curador provisório, o Ministério Público, quando não seja o requerente, apenas terá intervenção acessória no processo.

ARTIGO 948.º (Articulados)

À contestação, quando a haja, seguir-se-ão os demais articulados admitidos em processo ordinário.

ARTIGO 949.º (Prova preliminar)

Quando se trate de acção de interdição, ou de inabilitação não fundada em mera prodigalidade, haja ou não contestação, proceder-se-á, findos os articulados, ao interrogatório do requerido e à realização do exame pericial.

ARTIGO 950.º (Interrogatório)

O interrogatório tem por fim averiguar da existência e do grau de incapacidade do requerido e é feito pelo juiz, com a assistência do autor, dos representantes do requerido e do perito ou peritos nomeados, podendo qualquer dos presentes sugerir a formulação de certas perguntas.

ARTIGO 951.º (Exame pericial)

1. Logo após o interrogatório procede-se, sempre que possível, ao exame do requerido; podendo formar imediatamente juízo seguro, as conclusões da perícia são ditadas para a acta, fixando-se, no

caso contrário, prazo para a entrega do relatório.

2. Dentro do prazo marcado, pode continuar-se o exame no local mais apropriado e proceder-se às diligências que se mostrem necessárias.

3. Quando se pronuncie pela necessidade da interdição ou da inabilitação, o relatório pericial deve precisar, sempre que possível, a espécie de afecção de que sofre o requerido, a extensão da sua incapacidade, a data provável do começo desta e os meios de tratamento propostos.

4. Não é admitido segundo exame nesta fase do processo, mas quando os peritos não chegarem a uma conclusão segura sobre a capacidade ou incapacidade do arguido, será ouvido o requerente, que pode promover exame numa clínica da especialidade, pelo respectivo director, responsabilizando-se pelas despesas; para este efeito pode ser autorizado o internamento do arguido pelo tempo indispensável, nunca excedente a um mês.

ARTIGO 952.º (Termos posteriores ao interrogatório e exame)

1. Se o interrogatório e o exame do requerido fornecerem elementos suficientes e a acção não tiver sido contestada, pode o juiz decretar imediatamente a interdição ou inabilitação.

2. Nos restantes casos, seguir-se-ão os termos do processo ordinário, posteriores aos articulados; sendo ordenado na fase de instrução novo exame médico do requerido, aplicar-se-ão as disposições relativas ao primeiro exame.

ARTIGO 953.º (Providências provisórias)

1. Em qualquer altura do processo, pode o juiz, oficiosamente ou a requerimento do autor ou do representante do requerido, proferir decisão provisória, nos próprios autos, nos termos previstos no artigo 142.º do Código Civil.

2. Da decisão que decreta a providência provisória cabe agravo que sobe imediatamente, em separado e sem efeito suspensivo.

ARTIGO 954.º (Conteúdo da sentença)

1. A sentença que decretar, definitiva ou provisoriamente, a interdição ou a inabilitação, consoante o grau de incapacidade do arguido e independentemente de se ter pedido uma ou outra, fixará, sempre que seja possível, a data do começo da incapacidade e confirmará ou designará o tutor e o protutor ou o curador e, se for necessário, o subcurador, convocando o conselho de família, quando deva ser ouvido.

2. No caso de inabilitação, a sentença especificará os actos que devem ser autorizados ou praticados pelo curador.

3. Se a interdição ou inabilitação for decretada em apelação, a nomeação do tutor e protutor ou do curador e subcurador faz-se na 1ª instância, quando baixe o processo.

4. Na decisão da matéria de facto, deve o juiz oficiosamente tomar em consideração todos os factos provados, mesmo que não alegados pelas partes.

ARTIGO 955.º (Recurso de apelação)

1. Da sentença de interdição ou inabilitação definitiva pode apelar o representante do arguido; pode também apelar o requerente, se ficar vencido quanto à extensão e limites da incapacidade.

2. A apelação tem efeito meramente devolutivo; subsiste, porém, nos termos estabelecidos, a representação processual do interdito ou inabilitado, podendo o tutor ou curador nomeado intervir também no recurso como assistente.

ARTIGO 956.º (Efeitos do trânsito em julgado da decisão)

1. Passada em julgado a decisão final, observar-se-á o seguinte:

a) Se tiver sido decretada a interdição, ou a inabilitação nos termos do artigo 154.º do Código Civil, serão relacionados no próprio processo os bens do interdito ou do inabilitado;

b) Se não tiver sido decretada a interdição nem a inabilitação, será dado conhecimento do facto por editais afixados nos mesmos locais e por anúncio publicado no mesmo jornal em que tenha sido dada publicidade à instauração da acção.

2. O tutor ou curador pode requerer, após o trânsito da sentença, a anulação, nos termos da lei civil, dos actos praticados pelo arguido a partir da publicação do anúncio referido no artigo 945.º; autuado por apenso o requerimento, serão citadas as pessoas directamente interessadas e seguir-se-ão os termos do processo sumário.

ARTIGO 957.º (Seguimento da acção mes-

mo depois da morte do arguido)

1. Falecendo o arguido no decurso do processo, mas depois de feitos o interrogatório e o exame, pode o requerente pedir que a acção prossiga para o efeito de se verificar se existia e desde quando datava a incapacidade alegada.

2. Não se procede neste caso a habilitação dos herdeiros do falecido, prosseguindo a causa contra quem nela o representava.

ARTIGO 958.º (Levantamento da interdição ou inabilitação)

1. O levantamento da interdição ou inabilitação será requerido por apenso ao processo em que ela foi decretada.

2. Autuado o respectivo requerimento, seguir-se-ão, com as necessárias adaptações, os termos previstos nos artigos anteriores, sendo notificados para deduzir oposição o Ministério Público, o autor na acção de interdição ou inabilitação e o representante que tiver sido nomeado ao interdito ou inabilitado.

3. A interdição pode ser substituída por inabilitação, ou esta por aquela, quando a nova situação do incapaz o justifique.

5) Instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad

A) De la tutela

Designação do tutor

ARTIGO 1927º (Pessoas a quem compete a tutela)

O cargo de tutor recairá sobre a pessoa designada pelos pais ou pelo tribunal de menores.

ARTIGO 1928º (Tutor designado pelos pais)

1. Os pais podem nomear tutor ao filho menor para o caso de virem a falecer ou se tornarem incapazes; se apenas um dos progenitores exercer o poder paternal, a ele pertencerá esse poder.

2. Quando, falecido um dos progenitores que houver nomeado tutor ao filho menor, lhe sobreviver o outro, a designação considera-se eficaz se não for revogada por este no exercício do poder paternal.

3. A designação do tutor e respectiva revogação só tem validade sendo feitas em testamento ou em documento autêntico ou autenticado.

ARTIGO 1929º (Designação de vários tutores)

Quando, nos termos do artigo anterior, tiver sido designado mais de um tutor para o mesmo filho, recairá a tutela em cada um dos designados segundo a ordem da designação, quando a precedência entre eles não for de outro modo especificada.

(...)

ARTIGO 1931º (Tutor designado pelo tribunal)

1. Quando os pais não tenham designado tutor ou este não haja sido confirmado, compete ao tribunal de menores, ouvido o conselho de família, nomear o tutor de entre os parentes ou afins do menor ou de entre as pessoas que de facto tenham cuidado ou estejam a cuidar do menor ou tenham por ele demonstrado afeição.

2. Antes de proceder à nomeação de tutor, deve o tribunal ouvir o menor que tenha completado catorze anos.

ARTIGO 1932º (Tutela de vários irmãos)

A tutela respeitante a dois irmãos caberá, sempre que possível, a um só tutor.

ARTIGO 1933º (Quem não pode ser tutor)

1. Não podem ser tutores:

a) Os menores não emancipados, os interditos e os inabilitados;

b) Os notoriamente dementes, ainda que não estejam interditos ou inabilitados;

c) As pessoas de mau procedimento ou que não tenham modo de vida conhecido;

d) Os que tiverem sido inibidos ou se encontrarem total ou parcialmente suspensos do poder paternal;

e) Os que tiverem sido removidos ou se encontrarem suspensos de outra tutela ou do cargo de vogal de conselho de família por falta de cumprimento das respectivas obrigações;

f) Os divorciados e os separados judicialmente de pessoas e bens por sua culpa;

g) Os que tenham demanda pendente com o menor ou com seus pais, ou a tenham tido há menos de cinco anos;

h) Aquele cujos pais, filhos ou cônjuges tenham, ou hajam tido há menos de cinco anos, demanda com o menor ou seus pais;

i) Os que sejam inimigos pessoais do menor ou dos seus pais;

j) Os que tenham sido excluídos pelo pai ou mãe do menor, nos mesmos termos em que qualquer deles pode designar tutor;

l) Os magistrados judiciais ou de Ministério Público que exerçam funções na comarca do domicílio do menor ou na da situação dos seus bens.

2. Os inabilitados por prodigalidade, os falidos ou insolventes, e bem assim os inibidos ou suspensos do poder paternal ou removidos da tutela, quanto à administração de bens, podem ser nomeados tutores, desde que sejam apenas encarregados da guarda e regência da pessoa do menor.

ARTIGO 1934º (Escusa da tutela)

1. Podem escusar-se da tutela:

a) O Presidente da República e os membros do governo;

b) Os bispos e sacerdotes que tenham cura de almas, bem como os religiosos que vivam em comunidade;

c) Os militares em serviço activo;

d) Os que residam fora da comarca onde o me-

nor tem a maior parte dos bens, salvo se a tutela compreender apenas a regência da pessoa do menor, ou os bens deste forem de reduzido valor;

e) Os que tiverem mais de três descendentes a seu cargo;

f) Os que exerçam outra tutela ou curatela;

g) Os que tenham mais de sessenta e cinco anos;

h) Os que não sejam parentes ou afins em linha recta do menor, ou seus colaterais até ao quarto grau;

i) Os que, em virtude de doença, ocupações profissionais absorventes ou carência de meios económicos, não possam exercer a tutela sem grave incómodo ou prejuízo.

2. O que for escusado da tutela pode ser compelido a aceitá-la, desde que cesse o motivo da escusa.

Direitos e obrigações do tutor

ARTIGO 1935° (Princípios gerais)

1. O tutor tem os mesmos direitos e obrigações dos pais, com as modificações e restrições constantes dos artigos seguintes.

2. O tutor deve exercer a tutela com a diligência de um bom pai de família.

ARTIGO 1936° (Rendimentos dos bens do pupilo)

O tutor só pode utilizar os rendimentos dos bens do pupilo no sustento e educação deste e na administração dos seus bens.

ARTIGO 1937º (Actos proibidos ao tutor)

É vedado ao tutor:

- a) Dispor a título gratuito dos bens do menor;
- b) Tomar de arrendamento ou adquirir, directamente ou por interposta pessoa, ainda que seja em hasta pública, bens ou direitos do menor, ou tornar-se cessionário de créditos ou outros direitos contra ele, excepto nos casos de sub-rogação legal, de licitação em processo de inventário ou de outorga em partilha judicialmente autorizada;
- c) Celebrar em nome do pupilo contratos que o obriguem pessoalmente a praticar certos actos, excepto quando as obrigações contraídas sejam necessárias à sua educação, estabelecimento ou ocupação;
- d) Receber do pupilo, directamente ou por interposta pessoa, quaisquer liberalidades, por acto entre vivos ou por morte, se tiverem sido feitas depois da sua designação e antes da aprovação das respectivas contas, sem prejuízo do disposto para as deixas testamentárias no nº 3 do artigo 2192º.

ARTIGO 1938º (Actos dependentes de autorização do tribunal)

1. O tutor, como representante do pupilo, necessita de autorização do tribunal:

- a) Para praticar qualquer dos actos mencionados no nº 1 do artigo 1889º;
- b) Para adquirir bens, móveis ou imóveis, como aplicação de capitais do menor;

c) Para aceitar herança, doação ou legado, ou convencionar partilha extrajudicial;

d) Para contrair ou solver obrigações, salvo quando respeitem a alimentos do menor ou se mostrem necessárias à administração do seu património;

e) Para intentar acções, salvas as destinadas à cobrança de prestações periódicas e aquelas cuja demora possa causar prejuízo;

f) Para continuar a exploração do estabelecimento comercial ou industrial que o menor haja recebido por sucessão ou doação.

2. O tribunal não concederá a autorização que lhe seja pedida sem previamente ouvir o conselho de família.

3. O disposto no nº 1 não prejudica o que é especialmente determinado em relação aos actos praticados em processo de inventário.

ARTIGO 1939º (Nulidade dos actos praticados pelo tutor)

1. São nulos os actos praticados pelo tutor em contravenção do disposto no artigo 1937º; a nulidade não pode, porém, ser invocada pelo tutor ou seus herdeiros nem pela interposta pessoa de quem ele se tenha servido.

2. A nulidade é sanável mediante confirmação do pupilo, depois de maior ou emancipado, mas somente enquanto não for declarada por sentença com trânsito em julgado.

ARTIGO 1940° (Outras sanções)

1. Os actos praticados pelo tutor em contra-venção do disposto nas alíneas a) a d) do n° 1 do artigo 1938° podem ser anulados officiosamente pelo tribunal durante a menoridade do pupilo, ou a requerimento de qualquer vogal do conselho de família ou do próprio pupilo até cinco anos após a sua maioridade ou emancipação.

2. Os herdeiros do pupilo podem também requerer a anulação, desde que o façam antes de decorrido igual período sobre o falecimento.

3. Se o tutor intentar alguma acção em contra-venção do disposto na alínea e) do n° 1 do artigo 1938°, deve o tribunal ordenar officiosamente a suspensão da instância, depois da citação, até que seja concedida a autorização necessária.

4. Se o tutor continuar a explorar, sem autorização, o estabelecimento comercial ou industrial do pupilo, é pessoalmente responsável por todos os danos, ainda que acidentais, resultantes da exploração.

ARTIGO 1941° (Confirmação dos actos pelo tribunal)

O tribunal de menores, ouvido o conselho de família, pode confirmar os actos praticados pelo tutor sem a necessária autorização.

ARTIGO 1942° (Remuneração do tutor)

1. O tutor tem direito a ser remunerado.

2. Se a remuneração não tiver sido fixada pelos pais do menor no acto de designação do tutor,

será arbitrada pelo tribunal de menores, ouvido o conselho de família, não podendo, em qualquer caso, exceder a décima parte dos rendimentos líquidos dos bens do menor.

ARTIGO 1943º (Relação dos bens do menor)

1. O tutor é obrigado a apresentar uma relação do activo e do passivo do pupilo dentro do prazo que lhe for fixado pelo tribunal de menores.

2. Se o tutor for credor do menor, mas não tiver relacionado o respectivo crédito, não lhe é lícito exigir o cumprimento durante a tutela, salvo provando que à data da apresentação da relação ignorava a existência da dívida.

ARTIGO 1944º (Obrigação de prestar contas)

1. O tutor é obrigado a prestar contas ao tribunal de menores quando cessar a sua gerência ou, durante ela, sempre que o tribunal o exija.

2. Sendo as contas prestadas no termo da gerência, o tribunal ouvirá o ex-pupilo ou os seus herdeiros, se tiver terminado a tutela; no caso contrário, será ouvido o novo tutor.

ARTIGO 1945º (Responsabilidade do tutor)

1. O tutor é responsável pelo prejuízo que por dolo ou culpa causar ao pupilo.

2. Quando à vista das contas o tutor ficar alcançado, a importância do alcance vence os juros legais desde a aprovação daquelas, se os não vencer por outra causa desde data anterior.

ARTIGO 1946° (Direito do tutor a ser indemnizado)

1. Serão abonadas ao tutor as despesas que legalmente haja feito, ainda que delas, sem culpa sua, nenhum proveito tenha provindo ao menor.

2. O saldo a favor do tutor é satisfeito pelos primeiros rendimentos do menor; ocorrendo, porém, despesas urgentes, de forma que o tutor se não possa inteirar, vence juros o saldo, se não se prover de outro modo ao pronto pagamento da dívida.

ARTIGO 1947° (Contestação das contas aprovadas)

A aprovação das contas não impede que elas sejam judicialmente impugnadas pelo pupilo nos dois anos subseqüentes à maioridade ou emancipação, ou pelos seus herdeiros dentro do mesmo prazo, a contar do falecimento do pupilo, se este falecer antes de decorrido o prazo que lhe seria concedido se fosse vivo.

Remoção e exoneração do tutor

ARTIGO 1948° (Remoção do tutor)

Pode ser removido da tutela:

a) O tutor que falte ao cumprimento dos deveres próprios do cargo ou revele inaptidão para o seu exercício;

b) O tutor que por facto superveniente à investidura no cargo se constitua nalguma das

situações que impediriam a sua nomeação.

ARTIGO 1949° (Acção de remoção)

A remoção do tutor é decretada pelo tribunal de menores, ouvido o conselho de família, a requerimento do Ministério Público, de qualquer parente do menor, ou de pessoa a cuja guarda este esteja confiado de facto ou de direito.

ARTIGO 1950° (Exoneração do tutor)

O tutor pode, a seu pedido, ser exonerado do cargo pelo tribunal de menores:

- a) Se sobrevier alguma das causas de escusa;
- b) Ao fim de três anos, nos casos em que o tutor se podia ter escusado a aceitar o cargo, se subsistir a causa da escusa.

Conselho de família

ARTIGO 1951° (Constituição)

O conselho de família é constituído por dois vogais, escolhidos nos termos do artigo seguinte, e pelo agente do Ministério Público, que preside.

ARTIGO 1952° (Escolha dos vogais)

1. Os vogais do conselho de família são escolhidos entre os parentes ou afins do menor, tomando em conta, nomeadamente, a proximidade do grau, as relações de amizade, as aptidões, a idade, o lugar de residência e o interesse manifestado pela pessoa do menor.

2. Na falta de parentes ou afins que possam ser designados nos termos do número anterior,

cabe ao tribunal escolher os vogais de entre os amigos dos pais, vizinhos ou outras pessoas que possam interessar-se pelo menor.

3. Sempre que possível, um dos vogais do conselho de família pertencerá ou representará a linha paterna e o outro a linha materna do menor.

ARTIGO 1953° (Incapacidade. Escusa)

1. É aplicável aos vogais do conselho de família o disposto nos artigos 1933° e 1934°.

2. É ainda fundamento de escusa o facto de o vogal designado residir fora do território continental ou da ilha adjacente em que o menor tiver residência habitual.

ARTIGO 1954° (Atribuições)

Pertence ao conselho de família vigiar o modo por que são desempenhadas as funções do tutor e exercer as demais atribuições que a lei especialmente lhe confere.

ARTIGO 1955° (Protutor)

1. A fiscalização da acção do tutor é exercida com carácter permanente por um dos vogais do conselho de família denominado protutor.

2. O protutor deve, sempre que possível, representar a linha de parentesco diversa da do tutor.

3. Se o tutor for irmão germano do menor ou cônjuge de irmão germano, ou se ambos os vogais do conselho de família pertencerem à mesma

linha de parentesco ou não pertencerem a nenhuma delas, cabe ao tribunal a escolha do protutor.

ARTIGO 1956° (Outras funções do protutor)

Além de fiscalizar a acção do tutor, compete ao protutor:

a) Cooperar com o tutor no exercício das funções tutelares, podendo encarregar-se da administração de certos bens do menor nas condições estabelecidas pelo conselho de família e com o acordo do tutor;

b) Substituir o tutor nas suas faltas e impedimentos, passando, nesse caso, a servir de protutor o outro vogal do conselho de família;

c) Representar o menor em juízo ou fora dele, quando os seus interesses estejam em oposição com os do tutor e o tribunal não haja nomeado curador especial.

ARTIGO 1957° (Convocação do conselho)

1. O conselho de família é convocado por determinação do tribunal ou do Ministério Público, ou a requerimento de um dos vogais, do tutor, do administrador de bens, de qualquer parente do menor, ou do próprio menor, quando tiver mais de dezasseis anos.

2. A convocação indicará o objecto principal da reunião e será enviada a cada um dos vogais com oito dias de antecedência.

3. Faltando algum dos vogais, o conselho será convocado para outro dia; se de novo faltar algum

dos vogais, as deliberações serão tomadas pelo Ministério Público, ouvido o outro vogal, quando esteja presente.

4. A falta injustificada às reuniões do conselho de família torna o faltoso responsável pelos danos que o menor venha a sofrer.

ARTIGO 1958º (Funcionamento)

1. Os vogais do conselho de família são obrigados a comparecer pessoalmente.

2. O conselho de família pode deliberar que às suas reuniões ou a alguma delas assista o tutor, o administrador de bens, qualquer parente do menor, o próprio menor, ou ainda pessoa estranha à família cujo parecer seja útil; mas, em qualquer caso, só os vogais do conselho têm voto.

3. De igual faculdade goza o Ministério Público.

ARTIGO 1959º (Gratuidade das funções)

O exercício do cargo de vogal do conselho de família é gratuito.

ARTIGO 1960º (Remoção e exoneração)

São aplicáveis aos vogais do conselho de família, com as necessárias adaptações, as disposições relativas à remoção e exoneração do tutor.

Termo da tutela

ARTIGO 1961º (Quando termina)

A tutela termina:

a) Pela maioria, salvo o disposto no artigo 131º;

- b) Pela emancipação, salvo o disposto no artigo 1649º;
- c) Pela adopção;
- d) Pelo termo da inibição do poder paternal;
- e) Pela cessação do impedimento dos pais;
- f) Pelo estabelecimento da maternidade ou paternidade.

Tutela de menores confiados a estabelecimentos de educação ou assistência.

ARTIGO 1962º (Exercício da tutela)

1. Quando não exista pessoa em condições de exercer a tutela, o menor é confiado à assistência pública, nos termos da respectiva legislação, exercendo as funções de tutor o director do estabelecimento público ou particular onde tenha sido internado.

2. Neste caso, não existe conselho de família nem é nomeado protutor.

Administração de bens

ARTIGO 1967º (Designação do administrador)

Quando haja lugar à instituição da administração de bens do menor nos termos do artigo 1922º, são aplicáveis à designação do administrador as disposições relativas à nomeação do tutor, salvo o preceituado nos artigos seguintes.

ARTIGO 1968° (Designação por terceiro)

Ao autor de doação ou deixa em benefício de menor é lícita a designação de administrador, mas só com relação aos bens compreendidos na liberalidade.

ARTIGO 1969° (Pluralidade de administradores)

1. Tendo os pais ou terceiro designado vários administradores e tendo sido determinados os bens cuja administração compete a cada um deles, não é aplicável o critério da preferência pela ordem da designação.

2. O tribunal de menores pode também designar vários administradores, determinando os bens que a cada um compete administrar.

ARTIGO 1970° (Quem não pode ser administrador)

Além das pessoas que a lei impede de serem tutores, não podem ser administradores:

a) Os inabilitados por prodigalidade, os falidos ou insolventes, e bem assim os inibidos ou suspensos do poder paternal ou removidos da tutela quanto à administração de bens;

b) Os condenados como autores ou cúmplices dos crimes de furto, roubo, burla, abuso de confiança, falência ou insolvência fraudulenta e, em geral, de crimes dolosos contra a propriedade.

ARTIGO 1971° (Direitos e deveres do administrador)

1. No âmbito da sua administração, o administrador tem os direitos e deveres do tutor.

2. O administrador é o representante legal do menor nos actos relativos aos bens cuja administração lhe pertença.

3. O administrador deve abonar aos pais ou tutor, por força dos rendimentos dos bens, as importâncias necessárias aos alimentos do menor.

4. As divergências entre o administrador e os pais ou tutor são decididas pelo tribunal de menores, ouvido o conselho de família, se o houver.

ARTIGO 1972º (Remoção e exoneração. Termo da administração)

São aplicáveis ao administrador, com as necessárias adaptações, as disposições relativas à remoção e exoneração do tutor e ao termo da tutela.

6) Capacidad jurídica de las personas con discapacidad para la realización de actos jurídicos

A) Capacidad en negocios jurídicos (Negócio jurídico)

ARTIGO 226º (Morte, incapacidade ou indisponibilidade superveniente)

1. A morte ou incapacidade do declarante, posterior à emissão da declaração, não prejudica a eficácia desta, salvo se o contrário resultar da própria declaração.

2. A declaração é ineficaz, se o declarante, enquanto o destinatário não a receber ou dela não tiver conhecimento, perder o poder de disposição do direito a que ela se refere.

(...)

ARTIGO 231º (Morte ou incapacidade do proponente ou do destinatário)

1. Não obsta a conclusão do contrato a morte ou incapacidade do proponente, excepto se houver fundamento para presumir que outra teria sido a sua vontade.

2. A morte ou incapacidade do destinatário determina a ineficácia da proposta.

(...)

ARTIGO 257º (Incapacidade acidental)

1. A declaração negocial feita por quem, devido a qualquer causa, se encontrava acidentalmente incapacitado de entender o sentido dela ou não tinha o livre exercício da sua vontade é anulável, desde que o facto seja notório ou conhecido do declaratório.

2. O facto é notório, quando uma pessoa de normal diligência o teria podido notar.

(...)

ARTIGO 320º (Suspensão a favor de menores, interditos ou inabilitados)

1. A prescrição não começa nem corre contra menores enquanto não tiverem quem os represente ou administre seus bens, salvo se respeitar a actos para os quais o menor tenha capacidade;

e, ainda que o menor tenha representante legal ou quem administre os seus bens, a prescrição contra ele não se completa sem ter decorrido um ano a partir do termo da incapacidade.

2. Tratando-se de prescrições presuntivas, a prescrição não se suspende, mas não se completa sem ter decorrido um ano sobre a data em que o menor passou a ter representante legal ou administrador dos seus bens ou adquiriu plena capacidade.

3. O disposto nos números anteriores é aplicável aos interditos e inabilitados que não tenham capacidade para exercer o seu direito, com a diferença de que a incapacidade se considera finda, caso não tenha cessado antes, passados três anos sobre o termo do prazo que seria aplicável se a suspensão se não houvesse verificado.

B) Sobre la responsabilidad por actos cometidos por incapaces

ARTIGO 488º (Imputabilidade)

1. Não responde pelas consequências do facto danoso quem, no momento em que o facto ocorreu, estava, por qualquer causa, incapacitado de entender ou querer, salvo se o agente se colocou culposamente nesse estado, sendo este transitório.

2. Presume-se falta de imputabilidade nos menores de sete anos e nos interditos por anomalia psíquica.

ARTIGO 489º (Indemnização por pessoa não imputável)

1. Se o acto causador dos danos tiver sido praticado por pessoa não imputável, pode esta, por motivo de equidade, ser condenada a repará-los, total ou parcialmente, desde que não seja possível obter a devida reparação das pessoas a quem incumbe a sua vigilância.

2. A indemnização será, todavia, calculada por forma a não privar a pessoa não imputável dos alimentos necessários, conforme o seu estado e condição, nem dos meios indispensáveis para cumprir os seus deveres legais de alimentos.

(...)

ARTIGO 491º (Responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância de outrem)

As pessoas que, por lei ou negócio jurídico, forem obrigadas a vigiar outras, por virtude da incapacidade natural destas, são responsáveis pelos danos que elas causem a terceiro, salvo se mostrarem que cumpriram o seu dever de vigilância ou que os danos se teriam produzido ainda que o tivessem cumprido.

C) Capacidad e instrumentos públicos y privados

Documentos autênticos

ARTIGO 369° (Competência da autoridade ou oficial público)

1. O documento só é autêntico quando a autoridade ou oficial público que o exara for competente, em razão da matéria e do lugar, e não estiver legalmente impedido de o lavrar.

2. Considera-se, porém, exarado por autoridade ou oficial público competente o documento lavrado por quem exerça publicamente as respectivas funções, a não ser que os intervenientes ou beneficiários conhecessem, no momento da sua feitura, a falsa qualidade da autoridade ou oficial público, a sua incompetência ou a irregularidade da sua investidura.

ARTIGO 370° (Autenticidade)

1. Presume-se que o documento provém da autoridade ou oficial público a quem é atribuído, quando estiver subscrito pelo autor com assinatura reconhecida por notário ou com o selo do respectivo serviço.

2. A presunção de autenticidade pode ser ilidida mediante prova em contrário, e pode ser excluída oficiosamente pelo tribunal quando seja manifesta pelos sinais exteriores do documento a sua falta de autenticidade; em caso de dúvida, pode ser ouvida a autoridade ou oficial público a quem o documento é atribuído.

3. Quando o documento for anterior ao século XVIII, a sua autenticidade será estabelecida por meio de exame feito na Torre do Tombo, desde

que seja contestada ou posta em dúvida por alguma das partes ou pela entidade a quem o documento for apresentado.

ARTIGO 371º (Força probatória)

1. Os documentos autênticos fazem prova plena dos factos que referem como praticados pela autoridade ou oficial público respectivo, assim como dos factos que neles são atestados com base nas percepções da entidade documentadora; os meros juízos pessoais do documentador só valem como elementos sujeitos à livre apreciação do julgador.

2. Se o documento contiver palavras emendadas, truncadas ou escritas sobre rasuras ou entrelinhas, sem a devida ressalva, determinará o julgador livremente a medida em que os vícios externos do documentos excluem ou reduzem a sua força probatória.

(...)

ARTIGO 373º (Assinatura)

1. Os documentos particulares devem ser assinados pelo seu autor, ou por outrem a seu rogo, se o rogante não souber ou não puder assinar.

2. Nos títulos emitidos em grande número ou nos demais casos em que o uso o admita, pode a assinatura ser substituída por simples reprodução mecânica.

3. Se o documento for subscrito por pessoa que não saiba ou não possa ler, a subscrição só obriga

quando feita ou confirmada perante notário, depois de lido o documento ao subscriptor.

4. O rogo deve igualmente ser dado ou confirmado perante notário, depois de lido o documento ao rogante.

ARTIGO 374° (Autoria da letra e da assinatura)

1. A letra e a assinatura, ou só a assinatura, de um documento particular consideram-se verdadeiras, quando reconhecidas ou não impugnadas, pela parte contra quem o documento é apresentado, ou quando esta declare não saber se lhe pertencem, apesar de lhe serem atribuídas, ou quando sejam havidas legal ou judicialmente como verdadeiras.

2. Se a parte contra quem o documento é apresentado impugnar a veracidade da letra ou da assinatura, ou declarar que não sabe se são verdadeiras, não lhe sendo elas imputadas, incumbe à parte que apresentar o documento a prova da sua veracidade.

ARTIGO 375° (Reconhecimento notarial)

1. Se estiverem reconhecidas presencialmente, nos termos das leis notariais, a letra e a assinatura do documento, ou só a assinatura, têm-se por verdadeiras.

2. Se a parte contra quem o documento é apresentado arguir a falsidade do reconhecimento presencial da letra e da assinatura, ou só da assinatura, a ela incumbe a prova dessa falsidade.

3. Salvo disposição legal em contrário, o reconhecimento por semelhança vale como mero juízo pericial.

ARTIGO 376° (Força probatória)

1. O documento particular cuja autoria seja reconhecida nos termos dos artigos antecedentes faz prova plena quanto às declarações atribuídas ao seu autor, sem prejuízo da arguição e prova da falsidade do documento.

2. Os factos compreendidos na declaração consideram-se provados na medida em que forem contrários aos interesses do declarante; mas a declaração é indivisível, nos termos prescritos para a prova por confissão.

3. Se o documento contiver notas marginais, palavras entrelinhadas, rasuras, emendas ou outros vícios externos, sem a devida ressalva, cabe ao julgador fixar livremente a medida em que esses vícios excluem ou reduzem a força probatória do documento.

ARTIGO 377° (Documentos autenticados)

Os documentos particulares autenticados nos termos da lei notarial têm a força probatória dos documentos autênticos, mas não os substituem quando a lei exija documento desta natureza para a validade do acto.

ARTIGO 378° (Assinatura em branco)

Se o documento tiver sido assinado em branco, total ou parcialmente, o seu valor probatório pode ser ilidido, mostrando-se que nele se inseriram

declarações divergentes do ajustado com o signatário ou que o documento lhe foi subtraído.

D) De la capacidad de contratar

ARTIGO 764° (Capacidade do devedor e do credor)

1. O devedor tem de ser capaz, se a prestação constituir um acto de disposição; mas o credor que haja recebido do devedor incapaz pode opor-se ao pedido de anulação, se o devedor não tiver tido prejuízo com o cumprimento.

2. O credor deve, pelo seu lado, ter capacidade para receber a prestação; mas, se esta chegar ao poder do representante legal do incapaz ou o património deste tiver enriquecido, pode o devedor opor-se ao pedido de anulação da prestação realizada e de novo cumprimento da obrigação, na medida do que tiver sido recebido pelo representante ou do enriquecimento do incapaz.

(...)

ARTIGO 876° (Venda de coisa ou direito litigioso)

1. Não podem ser compradores de coisa ou direito litigioso, quer directamente, quer por interposta pessoa, aqueles a quem a lei não permite que seja feita a cessão de créditos ou direitos litigiosos, conforme se dispõe no capítulo respectivo.

2. A venda feita com quebra do disposto no número anterior, além de nula, sujeita o comprador, nos termos gerais, à obrigação de reparar os danos causados.

3. A nulidade não pode ser invocada pelo comprador.

ARTIGO 877º (Venda a filhos ou netos)

1. Os pais e avós não podem vender a filhos ou netos, se os outros filhos ou netos não consentirem na venda; o consentimento dos descendentes, quando não possa ser prestado ou seja recusado, é susceptível de suprimento judicial.

2. A venda feita com quebra do que preceitua o número anterior é anulável; a anulação pode ser pedida pelos filhos ou netos que não deram o seu consentimento, dentro do prazo de um ano a contar do conhecimento da celebração do contrato, ou do termo da incapacidade, se forem incapazes.

3. A proibição não abrange a dação em cumprimento feita pelo ascendente.

E) De la capacidad para hacer y aceptar donaciones

ARTIGO 948º (Capacidade activa)

1. Têm capacidade para fazer doações todos os que podem contratar e dispor dos seus bens.

2. A capacidade é regulada pelo estado em que o doador se encontrar ao tempo da declaração negocial.

ARTIGO 949° (Carácter pessoal da doação)

1. Não é permitido atribuir a outrem, por mandato, a faculdade de designar a pessoa do donatário ou determinar o objecto da doação, salvo nos casos previstos no n° 2 do artigo 2182°.

2. Os representantes legais dos incapazes não podem fazer doações em nome destes.

ARTIGO 950° (Capacidade passiva)

1. Podem receber doações todos os que não estão especialmente inibidos de as aceitar por disposição da lei.

2. A capacidade do donatário é fixada no momento da aceitação.

ARTIGO 951° (Aceitação por parte de incapazes)

1. As pessoas que não têm capacidade para contratar não podem aceitar doações com encargos senão por intermédio dos seus representantes legais.

2. Porém, as doações puras feitas a tais pessoas produzem efeitos independentemente de aceitação em tudo o que aproveite aos donatários.

ARTIGO 952° (Doação a nascituros)

1. Os nascituros concebidos ou não concebidos podem adquirir por doação, sendo filhos de pessoa determinada, viva ao tempo da declaração de vontade do dador.

2. Na doação feita a nascituros presume-se que o dador reserva para si o usufruto dos bens dados até ao nascimento do donatário.

F) De la capacidad para ser mandante o mandatario

ARTIGO 1174° (Casos de caducidade)

O mandato caduca:

- a) Por morte ou interdição do mandante ou do mandatário;
- b) Por inabilitação do mandante, se o mandato tiver por objecto actos que não possam ser praticados sem intervenção do curador.

ARTIGO 1175° (Morte, interdição ou inabilitação do mandante)

A morte, interdição ou inabilitação do mandante não faz caducar o mandato, quando este tenha sido conferido também no interesse do mandatário ou de terceiro; nos outros casos, só o faz caducar a partir do momento em que seja conhecida do mandatário, ou quando da caducidade não possam resultar prejuízos para o mandante ou seus herdeiros.

ARTIGO 1176° (Morte, interdição ou incapacidade natural do mandatário)

1. Caducando o mandato por morte ou interdição do mandatário, os seus herdeiros devem prevenir o mandante e tomar as providências adequadas, até que ele próprio esteja em condições de providenciar.

2. Idêntica obrigação recai sobre as pessoas que convivam com o mandatário, no caso de incapacidade natural deste.

ARTIGO 1177° (Pluralidade de mandatários)

Se houver vários mandatários com obrigação de agir conjuntamente, o mandato caduca em relação a todos, embora a causa de caducidade respeite apenas a um deles, salvo convenção em contrário.

(...)

ARTIGO 1230° (Morte ou incapacidade das partes)

1. O contrato de empreitada não se extingue por morte do dono da obra, nem por morte ou incapacidade do empreiteiro, a não ser que, neste último caso, tenham sido tomadas em conta, no acto da celebração, as qualidades pessoais deste.

2. Extinto o contrato por morte ou incapacidade do empreiteiro, considera-se a execução da obra como impossível por causa não imputável a qualquer das partes.

(...)

ARTIGO 1266° (Capacidade para adquirir a posse)

Podem adquirir posse todos os que têm uso da razão, e ainda os que o não têm, relativamente às coisas susceptíveis de ocupação.

(...)

ARTIGO 1289° (Capacidade para adquirir)

1. A usucapião aproveita a todos os que podem adquirir.

2. Os incapazes podem adquirir por usucapião,

tanto por si como por intermédio das pessoas que legalmente os representam.

(...)

ARTIGO 1592° (Restituições, nos casos de incapacidade e de retractação)

1. No caso de o casamento deixar de celebrar-se por incapacidade ou retractação de algum dos promitentes, cada um deles é obrigado a restituir os donativos que o outro ou terceiro lhe tenha feito em virtude da promessa e na expectativa do casamento, segundo os termos prescritos para a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico.

2. A obrigação de restituir abrange as cartas e retratos pessoais do outro contraente, mas não as coisas que hajam sido consumidas antes da retractação ou da verificação da incapacidade.

G) De la capacidad para contraer matrimonio

Casamento católico

ARTIGO 1596° (Capacidade civil)

O casamento católico só pode ser celebrado por quem tiver a capacidade matrimonial exigida na lei civil.

ARTIGO 1597° (Processo preliminar)

1. A capacidade matrimonial dos nubentes é comprovada por meio do processo preliminar de

publicações, organizado nas repartições do registo civil a requerimento dos nubentes ou do pároco respectivo.

2. O consentimento dos pais ou tutor, relativo ao nubente menor, pode ser prestado na presença de duas testemunhas perante o pároco, o qual levantará auto de ocorrência, assinando-o com todos os intervenientes.

ARTIGO 1598º (Certificado da capacidade matrimonial)

1. Verificada no despacho final do processo preliminar a inexistência de impedimento à realização do casamento, o funcionário do registo civil extrairá dele o certificado da capacidade matrimonial, que é remetido ao pároco e sem o qual o casamento não pode ser celebrado.

2. Se, depois de expedido o certificado, o funcionário tiver conhecimento de algum impedimento, comunicá-lo-á imediatamente ao pároco, a fim de se sobrestar na celebração até ao julgamento respectivo.

ARTIGO 1599º (Dispensa do processo preliminar)

1. O casamento «in articulo mortis», na iminência de parto ou cuja celebração imediata seja expressamente autorizada pelo ordinário próprio por grave motivo de ordem moral pode celebrar-se independentemente do processo preliminar de publicações de passagem do certificado da capacidade matrimonial dos nubentes.

2. A dispensa de processo preliminar não altera as exigências da lei civil quanto à capacidade matrimonial dos nubentes, continuando estes sujeitos às sanções estabelecidas na mesma lei.

Casamento civil

ARTIGO 1600° (Regra geral)

Têm capacidade para contrair casamento todos aqueles em quem se não verifique algum dos impedimentos matrimoniais previstos na lei.

ARTIGO 1601° (Impedimentos dirimentes absolutos)

São impedimentos dirimentes, obstando ao casamento da pessoa a quem respeitam com qualquer outra:

- a) A idade inferior a dezasseis anos;
- b) A demência notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, e a interdição ou inabilitação por anomalia psíquica;
- c) O casamento anterior não dissolvido, católico ou civil, ainda que o respectivo assento não tenha sido lavrado no registo do estado civil.

(...)

ARTIGO 1604° (Impedimentos impedientes)

São impedimentos impedientes, além de outros designados em leis especiais:

- a) A falta de autorização dos pais ou do tutor para o casamento do nubente menor, quando

não suprida pelo conservador do registo civil;

- b) O prazo internupcial;
- c) O parentesco no terceiro grau da linha colateral;
- d) O vínculo de tutela, curatela ou administração legal de bens;
- e) O vínculo de adopção restrita;
- f) A pronúncia do nubente pelo crime de homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o cônjuge do outro, enquanto não houver despronúncia ou absolvição por decisão passada em julgado.

(...)

ARTIGO 1609° (Dispensa)

1. São susceptíveis de dispensa os impedimentos seguintes:

- a) O parentesco no terceiro grau da linha colateral;
- b) O vínculo de tutela, curatela ou administração legal de bens, se as respectivas contas estiverem já aprovadas;
- c) O vínculo de adopção restrita.

2. A dispensa compete ao conservador do registo civil, que a concederá quando haja motivos sérios que justifiquem a celebração do casamento.

3. Se algum dos nubentes for menor, o conservador ouvirá, sempre que possível, os pais ou o tutor.

(...)

ARTIGO 1612° (Autorização dos pais ou do tutor)

1. A autorização para o casamento de menor de dezoito anos e maior de dezasseis deve ser concedida pelos progenitores que exerçam o poder paternal, ou pelo tutor.

2. Pode o conservador do registo civil suprir a autorização a que se refere o número anterior se razões ponderosas justificarem a celebração do casamento e o menor tiver suficiente maturidade física e psíquica.

(...)

ARTIGO 1635° (Anulabilidade por falta de vontade)

O casamento é anulável por falta de vontade:

a) Quando o nubente, no momento da celebração, não tinha a consciência do acto que praticava, por incapacidade accidental ou outra causa; (...)

(...)

ARTIGO 1643° (Anulação fundada em impedimento dirimente)

1. A acção de anulação fundada em impedimento dirimente deve ser instaurada:

a) Nos casos de menoridade, interdição ou inabilitação por anomalia psíquica ou demência notória, quando proposta pelo próprio incapaz, até seis meses depois de ter atingido a maioridade, de lhe ter sido levantada a interdição ou inabilitação ou de a demência ter cessado; quando proposta por outra pessoa, dentro dos três anos seguintes à celebração do casamento, mas nun-

ca depois da maioridade, do levantamento da incapacidade ou da cessação da demência;

H) De la capacidad para ejercer la patria potestad

Reconhecimento de paternidade

ARTIGO 1850° (Capacidade)

1. Têm capacidade para perfilhar os indivíduos com mais de dezasseis anos, se não estiverem interditos por anomalia psíquica ou não forem notoriamente dementes no momento da perfilhação.

2. Os menores, os interditos não compreendidos no número anterior e os inabilitados não necessitam, para perfilhar, de autorização dos pais, tutores ou curadores.

(...)

ARTIGO 1861° (Anulação por incapacidade)

1. A perfilhação é anulável por incapacidade do perfilhante a requerimento deste ou de seus pais ou tutor.

2. A acção pode ser intentada dentro de um ano, contado:

a) Da data da perfilhação, quando intentada pelos pais ou tutor;

b) Da maioridade ou emancipação, quando intentada pelo que perfilhou antes da idade exigida por lei;

c) Do termo da incapacidade, quando intentada por quem perfilhou estando interdito por anomalia psíquica ou notoriamente demente.

(...)

ARTIGO 1870° (Legitimidade da mãe menor)

A mãe menor tem legitimidade para intentar a acção em representação do filho sem necessidade de autorização dos pais, mas é sempre representada na causa por curador especial nomeado pelo tribunal.

(...)

ARTIGO 1880° (Despesas com os filhos maiores ou emancipados)

Se no momento em que atingir a maioridade ou for emancipado o filho não houver completado a sua formação profissional, manter-se-á a obrigação a que se refere o número anterior na medida em que seja razoável exigir aos pais o seu cumprimento e pelo tempo normalmente requerido para que aquela formação se complete.

Poder paternal relativamente aos bens dos filhos

ARTIGO 1888° (Exclusão da administração)

1. Os pais não têm a administração:

a) Dos bens do filho que procedam de sucessão da qual os pais tenham sido excluídos por indignidade ou deserdação;

b) Dos bens que tenham advindo ao filho por

doação ou sucessão contra a vontade dos pais;

c) Dos bens deixados ou doados ao filho com exclusão da administração dos pais;

d) Dos bens adquiridos pelo filho maior de dezasseis anos pelo seu trabalho.

2. A exclusão da administração, nos termos da alínea c) do número anterior, é permitida mesmo relativamente a bens que caibam ao filho a título de legítima.

ARTIGO 1889º (Actos cuja validade depende de autorização do tribunal)

1. Como representantes do filho não podem os pais, sem autorização do tribunal:

a) Alienar ou onerar bens, salvo tratando-se de alienação onerosa de coisas susceptíveis de perda ou deterioração;

b) Votar, nas assembleias gerais das sociedades, deliberações que importem a sua dissolução;

c) Adquirir estabelecimento comercial ou industrial ou continuar a exploração do que o filho haja recebido por sucessão ou doação;

d) Entrar em sociedade em nome colectivo ou em comandita simples ou por acções;

e) Contrair obrigações cambiárias ou resultantes de qualquer título transmissível por endosso;

f) Garantir ou assumir dívidas alheias;

g) Contrair empréstimos;

h) Contrair obrigações cujo cumprimento se deva verificar depois da maioridade;

i) Ceder direitos de crédito;

- j) Repudiar herança ou legado;
- l) Aceitar herança, doação ou legado com encargos, ou convencionar a partilha extrajudicial;
- m) Locar bens, por prazo superior a seis anos;
- n) Convencionar ou requerer em juízo a divisão de coisa comum ou a liquidação e partilha de patrimónios sociais;
- o) Negociar transacção ou comprometer-se em árbitros relativamente a actos referidos nas alíneas anteriores, ou negociar concordata com os credores.

2. Não se considera abrangida na restrição da alínea a) do número anterior a aplicação de dinheiro ou capitais do menor na aquisição de bens.

ARTIGO 1890º (Aceitação e rejeição de liberalidades)

1. Se ao filho for deixada herança ou legado, ou for feita proposta de doação que necessite de ser aceite, devem os pais aceitar a liberalidade, se o puderem fazer legalmente, ou requerer ao tribunal, no prazo de trinta dias, autorização para aceitar ou rejeitar.

2. Se, decorrido aquele prazo sobre a abertura da sucessão ou sobre a proposta de doação, os pais nada tiverem providenciado, pode o filho ou qualquer dos seus parentes, o Ministério Público, o doador ou algum interessado nos bens deixados requerer ao tribunal a notificação dos pais para darem cumprimento ao disposto no

número anterior, dentro do prazo que lhes for assinado.

3. Se os pais nada declararem dentro do prazo fixado, a liberalidade tem-se por aceite, salvo se o tribunal julgar mais conveniente para o menor a rejeição.

4. No processo em que os pais requeiram autorização judicial para aceitar a herança, quando dela necessitem, poderão requerer autorização para convencionar a respectiva partilha extrajudicial, bem como a nomeação de curador especial para nela outorgar, em representação do menor, quando com ele concorram à sucessão ou a ela concorram vários incapazes por eles representados.

ARTIGO 1891º (Nomeação de curador especial)

1. Se o menor não tiver quem legalmente o represente, qualquer das pessoas mencionadas no nº 2 do artigo anterior tem legitimidade para requerer ao tribunal a nomeação de um curador especial para os efeitos do disposto no nº 1 do mesmo artigo.

2. Quando o tribunal recusar autorização aos pais para rejeitarem a liberalidade, será também nomeado oficiosamente um curador para o efeito da sua aceitação.

ARTIGO 1892º (Proibição de adquirir bens do filho)

1. Sem autorização do tribunal não podem os

pais tomar de arrendamento ou adquirir, directamente ou por interposta pessoa, ainda que em hasta pública, bens ou direitos do filho sujeito ao poder paternal, nem tornar-se cessionários de créditos ou outros direitos contra este, excepto nos casos de sub-rogação legal, de licitação em processo de inventário ou de outorga em partilha judicialmente autorizada.

2. Entende-se que a aquisição é feita por interposta pessoa nos casos referidos no n.º 2 do artigo 579.º

ARTIGO 1893.º (Actos anuláveis)

1. Os actos praticados pelos pais em contra-venção do disposto nos artigos 1889.º e 1892.º são anuláveis a requerimento do filho, até um ano depois de atingir a maioridade ou ser emancipado, ou, se ele entretanto falecer, a pedido dos seus herdeiros, excluídos os próprios pais responsáveis, no prazo de um ano a contar da morte do filho.

2. A anulação pode ser requerida depois de findar o prazo se o filho ou seus herdeiros mostrarem que só tiveram conhecimento do acto impugnado nos seis meses anteriores à proposição da acção.

3. A acção de anulação pode também ser intentada pelas pessoas com legitimidade para requerer a inibição do poder paternal, contento que o façam no ano seguinte à prática dos actos impugnados e antes de o menor atingir a maioridade ou ser emancipado.

(...)

ARTIGO 1900° (Fim da administração)

1. Os pais devem entregar ao filho, logo que este atinja a maioridade ou seja emancipado, todos os bens que lhe pertençam; quando por outro motivo cesse o poder paternal ou a administração, devem os bens ser entregues ao representante legal do filho.

2. Os móveis devem ser restituídos no estado em que se encontrarem; não existindo, pagarão os pais o respectivo valor, excepto se houverem sido consumidos em uso comum ao filho ou tiverem perecido por causa não imputável aos progenitores.

Inibição e limitações ao exercício do poder paternal

ARTIGO 1913° (Inibição de pleno direito)

1. Consideram-se de pleno direito inibidos do exercício do poder paternal:

- a) Os condenados definitivamente por crime a que a lei atribua esse efeito;
- b) Os interditos e os inabilitados por anomalia psíquica;
- c) Os ausentes, desde a nomeação do curador provisório.

2. Consideram-se de pleno direito inibidos de representar o filho e administrar os seus bens os menores não emancipados e os interditos e

inabilitados não referidos na alínea b) do número anterior.

3. As decisões judiciais que importem inibição do exercício do poder paternal são comunicadas, logo que transitem em julgado, ao tribunal competente, a fim de serem tomadas as providências que no caso couberem.

ARTIGO 1914º (Cessação da inibição)

A inibição de pleno direito do exercício do poder paternal cessa pelo levantamento da interdição ou inabilitação e pelo termo da curadoria.

ARTIGO 1915º (Inibição do exercício do poder paternal)

1. A requerimento do Ministério Público, de qualquer parente do menor ou de pessoa a cuja guarda ele esteja confiado, de facto ou de direito, pode o tribunal decretar a inibição do exercício do poder paternal quando qualquer dos pais infrinja culposamente os deveres para com os filhos, com grave prejuízo destes, ou quando, por inexperiência, enfermidade, ausência ou outras razões, não se mostre em condições de cumprir aqueles deveres.

2. A inibição pode ser total ou limitar-se à representação e administração dos bens dos filhos; pode abranger ambos os progenitores ou apenas um deles e referir-se a todos os filhos ou apenas a algum ou alguns.

3. Salvo decisão em contrário, os efeitos da

inibição que abranja todos os filhos estendem-se aos que nascerem depois de decretada.

1) De la capacidad en materia de sucesiones

Capacidade sucessória

ARTIGO 2033° (Princípios gerais)

1. Têm capacidade sucessória, além do Estado, todas as pessoas nascidas ou concebidas ao tempo da abertura da sucessão, não exceptuadas por lei.

2. Na sucessão testamentária ou contratual tem ainda capacidade:

- a) Os nascituros não concebidos, que sejam filhos de pessoa determinada, viva ao tempo da abertura da sucessão;
- b) As pessoas colectivas e as sociedades.

ARTIGO 2034° (Incapacidade por indignidade)

Carecem de capacidade sucessória, por motivo de indignidade:

- a) O condenado como autor ou cúmplice de homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, ascendente, adoptante ou adoptado;
- b) O condenado por denúncia caluniosa ou falso testemunho contra as mesmas pessoas, relativamente a crime a que corresponda pena de pri-

são superior a dois anos, qualquer que seja a sua natureza;

c) O que por meio de dolo ou coacção induziu o autor da sucessão a fazer, revogar ou modificar o testamento, ou disso o impediu;

d) O que dolosamente subtraiu, ocultou, inutilizou, falsificou ou suprimiu o testamento, antes ou depois da morte do autor da sucessão, ou se aproveitou de algum desses factos.

ARTIGO 2035° (Momento da condenação e do crime)

1. A condenação a que se referem as alíneas a) e b) do artigo anterior pode ser posterior à abertura da sucessão, mas só o crime anterior releva para o efeito.

2. Estando dependente de condição suspensiva a instituição de herdeiro ou a nomeação de legatário, é relevante o crime cometido até à verificação da condição.

ARTIGO 2036° (Declaração de indignidade)

A acção destinada a obter a declaração de indignidade pode ser intentada dentro do prazo de dois anos a contar da abertura da sucessão, ou dentro de um ano a contar, quer da condenação pelos crimes que a determinam, quer do conhecimento das causas de indignidade previstas nas alíneas c) e d) do artigo 2034°.

ARTIGO 2037° (Efeitos da indignidade)

1. Declarada a indignidade, a devolução da sucessão ao indigno é havida como inexistente, sendo

ele considerado, para todos os efeitos, possuidor de má fé dos respectivos bens.

2. Na sucessão legal, a capacidade do indigno não prejudica o direito de representação dos seus descendentes.

ARTIGO 2038º (Reabilitação do indigno)

1. O que tiver incorrido em indignidade, mesmo que esta já tenha sido judicialmente declarada, readquire a capacidade sucessória, se o autor da sucessão expressamente o reabilitar em testamento ou escritura pública.

2. Não havendo reabilitação expressa, mas sendo o indigno contemplado em testamento quando o testador já conhecia a causa da indignidade, pode ele suceder dentro dos limites da disposição testamentária.

(...)

ARTIGO 2043º (Representação nos casos de repúdio e incapacidade)

Os descendentes representam o seu ascendente, mesmo que tenham repudiado a sucessão destes ou sejam incapazes em relação a ele.

(...)

ARTIGO 2082º (Incapacidade da pessoa designada)

1. Se o cônjuge, o herdeiro ou legatário que tiver preferência for incapaz, exercerá as funções de cabeça-de-casal o seu representante legal.

2. O curador é tido como representante do inabilitado para o efeito do número anterior.

Partilha da herança

ARTIGO 2102º (Forma)

1. A partilha pode fazer-se extrajudicialmente, quando houver acordo de todos os interessados, ou por inventário judicial nos termos prescritos na lei de processo.

2. Procede-se ainda a inventário judicial quando o Ministério Público o requeira, por entender que o interesse do incapaz a quem a herança é deferida implica aceitação beneficiária, e ainda nos casos em que algum dos herdeiros não possa, por motivo de ausência em parte incerta ou de incapacidade de facto permanente, outorgar em partilha extrajudicial.

Da sucessão testamentária

ARTIGO 2188º (Princípio geral)

Podem testar todos os indivíduos que a lei não declare incapazes de o fazer.

ARTIGO 2189º (Incapacidade)

São incapazes de testar:

- a) os menores não emancipados;
- b) os interditos por anomalia psíquica.

ARTIGO 2190º (Sanção)

O testamento feito por incapazes é nulo.

ARTIGO 2191º (Momento da determinação da capacidade)

A capacidade do testador determina-se pela data do testamento.

Casos de indisponibilidade relativa

ARTIGO 2192° (Tutor, curador, administrador legal de bens e protutor)

1. É nula a disposição feita por interdito ou inabilitado a favor do seu tutor, curador ou administrador legal de bens, ainda que estejam aprovadas as respectivas contas.

2. É igualmente nula a disposição a favor do protutor, se este, na data em que o testamento foi feito, substituía qualquer das pessoas designadas no número anterior.

3. É, porém, válida a disposição a favor das mesmas pessoas, quando se trate de descendentes, ascendentes, colaterais até ao terceiro grau ou cônjuge do testador.

(...)

ARTIGO 2194° (Médicos, enfermeiros e sacerdotes)

É nula a disposição a favor do médico ou enfermeiro que tratar do testador, ou do sacerdote que lhe prestar assistência espiritual, se o testamento for feito durante a doença e o seu autor vier a falecer dela.

ARTIGO 2195° (Excepções)

A nulidade estabelecida no artigo anterior não abrange:

- a) os legados remuneratórios de serviços recebidos pelo doente;
- b) As disposições a favor das pessoas designadas no n° 3 do artigo 2192°

ARTIGO 2196° (Cúmplice do testador adúltero)

1. É nula a disposição a favor da pessoa com quem o testador casado cometeu adultério.

2. Não se aplica o preceito do número anterior:

a) Se o casamento já estava dissolvido, ou os cônjuges estavam separados judicialmente de pessoas e bens ou separados de facto há mais de seis anos, à data da abertura da sucessão;

b) Se a disposição se limitar a assegurar alimentos ao beneficiário.

ARTIGO 2197° (Intervenientes no testamento)

É nula a disposição a favor do notário ou entidade com funções notariais que lavrou o testamento público ou aprovou o testamento cerrado, ou a favor da pessoa que escreveu este, ou das testemunhas, abonadores ou intérpretes que intervieram no testamento ou na sua aprovação.

ARTIGO 2198° (Interpostas pessoas)

1. São nulas as disposições referidas nos artigos anteriores, quando feitas por meio de interposta pessoa.

2. Consideram-se interpostas pessoas as designadas no n° 2 do artigo 579°.

Falta e vícios da vontade

ARTIGO 2199° (Incapacidade accidental)

É anulável o testamento feito por quem se

encontrava incapacitado de entender o sentido da sua declaração ou não tinha o livre exercício da sua vontade por qualquer causa, ainda que transitória.

Forma do testamento

ARTIGO 2206° (Testamento cerrado)

1. O testamento diz-se cerrado, quando é escrito e assinado pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo, ou escrito por outra pessoa a rogo do testador e por este assinado.

2. O testador só pode deixar de assinar o testamento cerrado quando não saiba ou não possa fazê-lo, ficando consignada no instrumento de aprovação a razão por que o não assina.

3. A pessoa que assina o testamento deve rubricar as folhas que não contenham a sua assinatura.

(...)

ARTIGO 2208° (Inabilidade para fazer testamento cerrado)

Os que não sabem ou não podem ler são inábeis para dispor em testamento cerrado.

(...)

ARTIGO 2221° (Idoneidade das testemunhas, abonadores ou intérpretes; incapacidades)

1. Não pode ser testemunha, abonador ou intérprete em qualquer dos testamentos regulados

na presente secção quem está impedido de o ser nos documentos autênticos extra-oficiais.

2. É extensivo aos mesmos testamentos, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 2197º.

Substituições pupilar e quase-pupilar

ARTIGO 2297º (Substituição pupilar)

1. O progenitor que não estiver inibido total ou parcialmente do poder paternal tem a faculdade de substituir aos filhos os herdeiros ou legatários que bem lhe aprouver, para o caso de os mesmos filhos falecerem antes de perfazer os dezoito anos de idade: é o que se chama substituição pupilar.

2. A substituição fica sem efeito logo que o substituído perfaça os dezoito anos, ou se falecer deixando descendentes ou ascendentes.

ARTIGO 2298º (Substituição quase-pupilar)

1. A disposição do artigo anterior é aplicável, sem distinção de idade, ao caso de o filho ser incapaz de testar em consequência de interdição por anomalia psíquica: é o que se chama substituição quase-pupilar.

2. A substituição quase-pupilar fica sem efeito logo que seja levantada a interdição, ou se o substituto falecer deixando descendentes ou ascendentes.

ARTIGO 2299° (Transformação da substituição pupilar em quase-pupilar)

A substituição pupilar é havida para todos os efeitos como quase-pupilar, se o menor for declarado interdito por anomalia psíquica.

ARTIGO 2300° (Bens que podem ser abrangidos)

As substituições pupilar e quase pupilar só podem abranger os bens que o substituído haja adquirido por via do testador, embora a título de legítima.

7) Capacidad de las personas con discapacidad para actuar en el proceso

Código de Processo Civil Portugal

ARTIGO 5.º (Conceito e medida da personalidade judiciária)

1. A personalidade judiciária consiste na susceptibilidade de ser parte.

2. Quem tiver personalidade jurídica tem igualmente personalidade judiciária.

(...)

ARTIGO 9.º (Conceito e medida da capacidade judiciária)

1. A capacidade judiciária consiste na susceptibilidade de estar, por si, em juízo.

2. A capacidade judiciária tem por base e por medida a capacidade do exercício de direitos.

ARTIGO 10.º (Suprimento da incapacidade)

1. Os incapazes só podem estar em juízo por intermédio dos seus representantes, ou autorizados pelo seu curador, excepto quanto aos actos que possam exercer pessoal e livremente.

2. Os menores cujo poder paternal compete a ambos os pais são por estes representados em juízo, sendo necessário o acordo de ambos para a propositura de acções.

3. Quando seja réu um menor sujeito ao poder paternal dos pais, devem ambos ser citados para a acção.

ARTIGO 11.º (Representação por curador especial ou provisório)

1. Se o incapaz não tiver representante geral, deve requerer-se a nomeação dele ao tribunal competente, sem prejuízo da imediata designação de um curador provisório pelo juiz da causa, em caso de urgência.

2. Tanto no decurso do processo como na execução da sentença, pode o curador provisório praticar os mesmos actos que competiriam ao representante geral, cessando as suas funções logo que o representante nomeado ocupe o lugar dele no processo.

3. Quando o incapaz deva ser representado por curador especial, a nomeação dele incumbe igualmente ao juiz da causa, aplicando-se o disposto na primeira parte do número anterior.

4. A nomeação incidental de curador deve ser promovida pelo Ministério Público, podendo ser requerida por qualquer parente sucessível, quando o incapaz haja de ser autor, devendo sê-lo pelo autor, quando o incapaz figure como réu.

5. O Ministério Público é ouvido, sempre que não seja o requerente da nomeação.

ARTIGO 12.º (Desacordo entre os pais na representação do menor)

1 – Se, sendo o menor representado por ambos os pais, houver desacordo entre estes acerca da conveniência de intentar a acção, pode qualquer deles requerer ao tribunal competente para a causa a resolução do conflito.

2. Se o desacordo apenas surgir no decurso do processo, acerca da orientação deste, pode qualquer dos pais, no prazo de realização do primeiro acto processual afectado pelo desacordo, requerer ao juiz da causa que providencie sobre a forma de o incapaz ser nela representado, suspendendo-se entretanto a instância.

3. Ouvido o outro progenitor, quando só um deles tenha requerido, bem como o Ministério Público, o juiz decide de acordo com o interesse do menor, podendo atribuir a representação a só um dos pais, designar curador especial ou conferir a representação ao Ministério Público, cabendo agravo da decisão, com efeito meramente devolutivo.

4. A contagem do prazo suspenso reinicia-se com a notificação da decisão ao representante designado.

5 – Se houver necessidade de fazer intervir um menor em causa pendente, não havendo acordo entre os pais para o efeito, pode qualquer deles requerer a suspensão da instância até resolução do desacordo pelo tribunal da causa, que decidirá no prazo de 30 dias.

ARTIGO 13.º (Capacidade judiciária dos inabilitados)

1. Os inabilitados podem intervir em todas as acções em que sejam partes e devem ser citados quando tiverem a posição de réus, sob pena de se verificar a nulidade correspondente à falta de citação, ainda que tenha sido citado o curador.

2. A intervenção do inabilitado fica subordinada à orientação do curador, que prevalece no caso de divergência.

ARTIGO 14.º (Representação das pessoas impossibilitadas de receber a citação)

1. As pessoas que, por anomalia psíquica ou outro motivo grave, estejam impossibilitadas de receber a citação para a causa são representadas nela por um curador especial.

2. A representação do curador cessa, quando for julgada desnecessária, ou quando se juntar documento que mostre ter sido declarada a interdição ou a inabilitação e nomeado representante ao incapaz.

3. A desnecessidade da curadoria, quer seja originária, quer superveniente, é apreciada sumariamente, a requerimento do curatelado, que pode produzir quaisquer provas.

4. O representante nomeado na acção de interdição ou de inabilitação será citado para ocupar no processo o lugar de curador.

ARTIGO 15.º (Defesa do ausente e do incapaz pelo Ministério Público)

1. Se o ausente ou o incapaz, ou os seus representantes, não deduzirem oposição, ou se o ausente não comparecer a tempo de a deduzir, incumbe ao Ministério Público a defesa deles, para o que será citado, correndo novamente o prazo para a contestação.

2. Quando o Ministério Público represente o autor, será nomeado um defensor oficioso.

3. Cessa a representação do Ministério Público ou do defensor oficioso, logo que o ausente ou o seu procurador compareça, ou logo que seja constituído mandatário judicial do ausente ou do incapaz.

ARTIGO 16.º (Representação dos incertos)

1. Quando a acção seja proposta contra incertos, por não ter o autor possibilidade de identificar os interessados directos em contradizer, são aqueles representados pelo Ministério Público.

2. Quando o Ministério Público represente o autor, é nomeado defensor oficioso aos incertos.

3. A representação do Ministério Público ou do

defensor officioso só cessa quando os citados como incertos se apresentem para intervir como réus e a sua legitimidade se encontre devidamente reconhecida.

ARTIGO 17.º (Representação de incapazes e ausentes pelo Ministério Público)

1. Incumbe ao Ministério Público, em representação de incapazes e ausentes, intentar em juízo quaisquer acções que se mostrem necessárias à tutela dos seus direitos e interesses.

2. A representação cessa logo que seja constituído mandatário judicial do incapaz ou ausente, ou quando, deduzindo o respectivo representante legal oposição à intervenção principal do Ministério Público, o juiz, ponderado o interesse do representado, a considere procedente.

(...)

ARTIGO 20.º (Representação do Estado)

1. O Estado é representado pelo Ministério Público, sem prejuízo dos casos em que a lei especialmente permita o patrocínio por mandatário judicial próprio, cessando a intervenção principal do Ministério Público logo que este esteja constituído.

2. Se a causa tiver por objecto bens ou direitos do Estado, mas que estejam na administração ou fruição de entidades autónomas, podem estas constituir advogado que intervenha no processo juntamente com o Ministério Público, para o que serão citadas quando o Estado seja réu; havendo

divergência entre o Ministério Público e o advogado, prevalece a orientação daquele.

(...)

ARTIGO 23.º (Suprimento da incapacidade judiciária e da irregularidade de representação)

1. A incapacidade judiciária e a irregularidade de representação são sanadas mediante a intervenção ou citação do representante legítimo ou do curador do incapaz.

2. Se estes ratificarem os actos anteriormente praticados, o processo segue como se o vício não existisse; no caso contrário, fica sem efeito todo o processado posterior ao momento em que a falta se deu ou a irregularidade foi cometida, correndo novamente os prazos para a prática dos actos não ratificados, que podem ser renovados.

3. Se a irregularidade verificada consistir na preterição de algum dos pais, tem-se como ratificado o processado anterior, quando o preterido, devidamente notificado, nada disser dentro do prazo fixado; havendo desacordo dos pais acerca da repetição da acção ou da renovação dos actos, é aplicável o disposto no artigo 12.º.

4. Sendo o incapaz autor e tendo o processo sido anulado desde o início, se o prazo de prescrição ou caducidade tiver entretanto terminado ou terminar nos dois meses imediatos à anulação, não se considera completada a prescrição ou caducidade antes de findarem estes dois meses.

**ARTIGO 24.º (Iniciativa do juiz no supri-
mento)**

1. Logo que se aperceba de algum dos vícios a que se refere o artigo anterior, deve o juiz, oficiosamente e a todo o tempo, providenciar pela regularização da instância.

2. Incumbe ao juiz ordenar a citação do réu em quem o deva representar, ou, se a falta ou irregularidade respeitar ao autor, determinar a notificação de quem o deva representar na causa para, no prazo fixado, ratificar, querendo, no todo ou em parte, o processado anterior, suspendendo-se entretanto a instância.

ARTIGO 25.º (Falta de autorização ou de deliberação)

1. Se a parte estiver devidamente representada, mas faltar alguma autorização ou deliberação exigida por lei, designar-se-á o prazo dentro do qual o representante deve obter a respectiva autorização ou deliberação, suspendendo-se entretanto os termos da causa.

2. Não sendo a falta sanada dentro do prazo, o réu é absolvido da instância, quando a autorização ou deliberação devesse ser obtida pelo representante do autor; se era ao representante do réu que incumbia prover, o processo segue como se o réu não deduzisse oposição.

(...)

**ARTIGO 141.º (Participação de surdo,
mudo ou surdo-mudo)**

1 - Sem prejuízo da intervenção de intérprete idóneo sempre que o juiz o considerar conveniente, quando um surdo, mudo ou surdo-mudo devam prestar depoimento, observam-se as seguintes regras:

a) Ao surdo, formulam-se as perguntas por escrito, respondendo ele oralmente;

b) Ao mudo, formulam-se as perguntas oralmente, respondendo ele por escrito;

c) Ao surdo-mudo, formulam-se as perguntas por escrito, respondendo ele também por escrito.

2 - O juiz deve nomear intérprete idóneo ao surdo, ao mudo ou ao surdo-mudo que não souber ler ou escrever.

3 - O disposto nos números anteriores é correspondentemente aplicável aos requerimentos orais e à prestação de juramento.

(Decreto-Lei n.º 183/2000, de 10 de Agosto)

(...)

ARTIGO 553.º (De quem pode ser exigido)

1. O depoimento de parte pode ser exigido de pessoas que tenham capacidade judiciária.

2. Pode requerer-se o depoimento de inabilitados, assim como de representantes de incapazes, pessoas colectivas ou sociedades; porém, o depoimento só tem valor de confissão nos precisos termos em que aqueles possam obrigar-se e estes possam obrigar os seus representados.

3. Cada uma das partes pode requerer não só

o depoimento da parte contrária, mas também o dos seus compartes.

(...)

ARTIGO 616.º (Capacidade para depor como testemunha)

1. Têm capacidade para depor como testemunhas todos aqueles que, não estando interditos por anomalia psíquica, tiverem aptidão física e mental para depor sobre os factos que constituam objecto da prova.

2. Incumbe ao juiz verificar a capacidade natural das pessoas arroladas como testemunhas, com vista a avaliar a admissibilidade e a credibilidade do respectivo depoimento.

8)Legislación notarial

Decreto-Lei n.º 26/2004 de 4 de Fevereiro de 2004. (Estatuto do Notariado)

A)Notário e função notarial

Artigo 1.º Natureza

1 - O notário é o jurista a cujos documentos escritos, elaborados no exercício da sua função, é conferida fé pública.

2 - O notário é, simultaneamente, um oficial público que confere autenticidade aos documentos e assegura o seu arquivamento e um profissional liberal que actua de forma independente,

imparcial e por livre escolha dos interessados.

3 - A natureza pública e privada da função notarial é incindível.

(...)

Artigo 4.º Função notarial

1 - Compete, em geral, ao notário redigir o instrumento público conforme a vontade dos interessados, a qual deve indagar, interpretar e adequar ao ordenamento jurídico, esclarecendo-os do seu valor e alcance.

2 - Em especial, compete ao notário, designadamente:

a) Lavrar testamentos públicos, instrumentos de aprovação, depósito e abertura de testamentos cerrados e de testamentos internacionais;

b) Lavrar outros instrumentos públicos nos livros de notas e fora deles;

c) Exarar termos de autenticação em documentos particulares ou de reconhecimento da autoria da letra com que esses documentos estão escritos ou das assinaturas neles apostas;

d) Passar certificados de vida e identidade e, bem assim, do desempenho de cargos públicos, de gerência ou de administração de pessoas colectivas;

e) Passar certificados de outros factos que tenha verificado;

f) Certificar, ou fazer e certificar, traduções de documentos;

g) Passar certidões de instrumentos públicos, de registos e de outros documentos arquivados, extrair públicas-formas de documentos que para esse fim lhe sejam presentes ou conferir com os respectivos originais e certificar as fotocópias extraídas pelos interessados;

h) Lavrar instrumentos para receber a declaração, com carácter solene ou sob juramento, de honorabilidade e de não se estar em situação de falência, nomeadamente para efeitos do preenchimento dos requisitos condicionantes, na ordem jurídica comunitária, da liberdade de estabelecimento ou de prestação de serviços;

i) Lavrar instrumentos de actas de reuniões de órgãos sociais;

j) Transmitir por telecópia, sob forma certificada, o teor dos instrumentos públicos, registos e outros documentos que se achem arquivados no cartório, a outros serviços públicos perante os quais tenham de fazer fé e receber os que lhe forem transmitidos, por esses serviços, nas mesmas condições;

l) Intervir nos actos jurídicos extrajudiciais a que os interessados pretendam dar garantias especiais de certeza e autenticidade;

m) Conservar os documentos que por lei devam ficar no arquivo notarial e os que lhe forem confiados com esse fim.

3 - A solicitação dos interessados, o notário pode requisitar por qualquer via, a outros serviços

públicos, os documentos necessários à instrução dos actos da sua competência.

4 - Incumbe ao notário, a pedido dos interessados, preencher a requisição de registo, em impresso de modelo aprovado, e remetê-la à competente conservatória do registo predial ou comercial, acompanhada dos respectivos documentos e preparo.

(...)

Artigo 11.º Princípio da legalidade

1 - O notário deve apreciar a viabilidade de todos os actos cuja prática lhe é requerida, em face das disposições legais aplicáveis e dos documentos apresentados ou exibidos, verificando especialmente a legitimidade dos interessados, a regularidade formal e substancial dos referidos documentos e a legalidade substancial do acto solicitado.

2 - O notário deve recusar a prática de actos:

a) Que forem nulos, não couberem na sua competência ou pessoalmente estiver impedido de praticar;

b) Sempre que tenha dúvidas sobre a integridade das faculdades mentais dos participantes, salvo se no acto intervierem, a seu pedido ou a instância dos outorgantes, dois peritos médicos que, sob juramento ou compromisso de honra, abo-nem a sanidade mental daqueles.

3 - O notário não pode recusar a sua intervenção com fundamento na anulabilidade ou ineficácia

do acto, devendo, contudo, advertir os interessados da existência do vício e consignar no instrumento a advertência feita.

(...)

Artigo 25.º Requisitos de acesso à função notarial

São requisitos de acesso à função notarial:

a) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito para o exercício de funções notariais;

b) Possuir licenciatura em Direito reconhecida pelas leis portuguesas;

c) Ter frequentado o estágio notarial;

d) Ter obtido aprovação em concurso realizado pelo Conselho do Notariado.

(...)

B) Cessação de actividade e readmissão

Artigo 41.º Enumeração

O notário cessa a actividade nos seguintes casos:

a) Exoneração;

b) Limite de idade;

c) Incapacidade;

d) Morte;

e) Interdição definitiva do exercício da actividade.

(...)

Artigo 44.º Cessação de actividade por incapacidade

1 - Cessa a actividade por incapacidade o notário

que sofra de perturbação física ou psíquica que impossibilite o desempenho normal da sua função, comprovada por junta médica competente.

2 - No caso previsto no número anterior e sempre que a situação o justifique, o Conselho do Notariado pode determinar a imediata suspensão da actividade do notário.

9) Normativa general sobre discapacidad

Lei nº 33/2008 de 22/07 - Estabelece medidas de promoção da acessibilidade à informação sobre determinados bens de venda ao público para pessoas com deficiências e incapacidades visuais.

Lei nº 27/2007 de 30/07 - Aprova a Lei da Televisão, que regula o acesso à actividade de televisão e o seu exercício

Lei nº 46/2006, de 28/08 - Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência de risco agravado de saúde,

Lei nº 38/2004 de 18/08 - Define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência.

A Lei n.º 36/1998 de 24/07, designada por Lei de Saúde Mental estabelece os princípios gerais da política de saúde mental e regula o internamento compulsivo dos portadores de anomalia psíquica; designadamente das pessoas com doença mental.

Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08/08 - Promoção da acessibilidade.

Decreto-Lei n.º 307/2003 de 10/12 - Aprova o cartão de estacionamento de modelo comunitário para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade.

Decreto-Lei n.º 198/2001 de 03/07, alterado pela Lei n.º 32-B/2002 de 30/12 refere os benefícios fiscais para as pessoas com Deficiência

Decreto-lei n.º 6/2001 de 18/01 - aprova a reorganização curricular do ensino básico

Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3 de Fevereiro., o qual estabelece o sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência.

Decreto-Lei n.º 35/1999 de 05/02 - Estabelece a organização da prestação de cuidados de psiquiatria e saúde mental. Revoga o DL n.º127/92, de 19920703.

Decreto-Lei 118/1999 de 14/04, Cães - Guia para Cegos

Decreto-Lei n.º 265/1999 de 14/07 - procede à criação de uma nova prestação destinada a complementar a protecção concedida aos pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência dos regimes de segurança social em situação de dependência.

Decreto- Lei n.º 123/1997 de 22/05, torna obrigatória a adopção de um conjunto de normas técnicas básicas de eliminação de barreiras arquitectónicas em edifícios públicos, equipamentos colectivos e via pública para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada.

Decreto-Lei n.º 202/1996 de 23/10 - estabelece o regime de avaliação de incapacidade das pessoas com deficiência para efeitos de acesso às medidas e benefícios previstos na lei;

Decreto-Lei n.º 259/1993 de 22/07 - altera o Decreto-Lei n.º 103-A/90 de 22/03, Decreto-lei n.º 307/2003 de 10/12 - aprova o cartão de estacionamento modelo comunitário para pessoas com deficiência condicionadas na sua mobilidade.

Decreto- Lei n.º 319/1991 de 23/08 - estabelece o regime educativo especial aplicável aos alunos com necessidades educativas especiais; incluindo a eliminação de barreiras arquitectónicas na escola.

Decreto-Lei n.º 103-A/1990 de 22 /03- reformula o regime de benefícios fiscais aplicável na aquisição de veículos automóveis e cadeiras de rodas por deficientes;

Decreto-Lei n.º 18/1989 de 11 /01 - disciplina as actividades de apoio ocupacional aos deficientes graves.

Decreto-lei n.º 247/1989 de 05/08- aprova o regime de apoio técnico e financeiro a programas de reabilitação profissional das pessoas com deficiência;

Decreto-Lei n.º 40/1983 de 25/01 – estabelece o regime de emprego protegido; Decreto- Lei n.º 194/85 de 24 /06 – introduz alterações ao Decreto- Lei n.º 40/83 de 25/01. Decreto Reg. n.º 37/85 de 24/06 -regulamenta a aplicação do Decreto- Lei n.º 40/83 de 25/01.



ÍNDICE

PRÓLOGO, 7

1. Breve descripción del sistema legal, 27
 - A. Estructura del Estado, 27
 - B. Constitución de Portugal, 29
2. Concepto de discapacidad y de persona con discapacidad, 30
3. Régimen general de capacidad jurídica, 34
 - A. Reglas de derecho internacional privado, 34
 - B. Personalidad y capacidad jurídica, 38
4. Régimen legal de incapacitación o limitación de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad, 40
 - A. De los menores, 40
 - B. Interdicciones, 43
 - C. Inhabilitaciones, 47
 - D. Del proceso de declaración de incapacitación y de inhabilitación, 49
5. Instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad, 55
 - A. De la tutela, 55
6. Capacidad jurídica de las personas con discapacidad para la realización de actos jurídicos, 71

- A. Capacidad en negocios jurídicos, 71
 - B. Sobre la responsabilidad por actos cometidos por incapaces, 73
 - C. Capacidad e instrumentos públicos y privados, 74
 - D. De la capacidad de contratar, 79
 - E. De la capacidad para hacer y aceptar donaciones, 80
 - F. De la capacidad para ser mandante o mandatario, 82
 - G. De la capacidad para contraer matrimonio, 84
 - H. De la capacidad para ejercer la patria potestad, 89
 - I. De la capacidad en materia de sucesiones, 97
7. Capacidad de las personas con discapacidad para actuar en el proceso, 105
8. Legislaciones notariales, 114
- A. Notário e função notarial, 114
 - B. Cessaçã de actividade e readmissã, 118
9. Normativa general sobre discapacidad, 119





